

LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS
PLÁSTICAS EN COLOMBIA.



Presentado por
NATALIA ANSELMÍ GARCÉS
PIEDAD SORAYA TORRES RAMÍREZ

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
PROGRAMA DE DERECHO
CÚCUTA, COLOMBIA
2019

LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS
PLÁSTICAS EN COLOMBIA.



Presentado por
NATALIA ANSELMÍ GARCÉS
PIEDAD SORAYA TORRES RAMÍREZ

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de abogado

Director
Nelson Orlando Miranda Ruiz
Abogado

Asesor metodológico
LUIS ENRIQUE NIÑO OCHOA
Especialista en Investigación Social

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
PROGRAMA DE DERECHO
CÚCUTA, COLOMBIA
2019



**Centro Seccional de Investigaciones
FORMATO INSTITUCIONAL**

**DECLARACIÓN PERSONAL DE ORIGINALIDAD Y NO PLAGIO,
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO TRABAJO
DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO, EN
ATENCIÓN A LA VINCULACIÓN COMO ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE
DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y
SOCIALES**

Yo, NATALIA ANSELMÍ GARCÉS, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 1.090.453.646, expedida en Cúcuta (NDS) y PIEDAD SORAYA TORRES RAMÍREZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 60.359.063, expedida en Cúcuta (NDS) estudiantes del programa de derecho declaramos bajo la gravedad de juramento:

Que los artículos, documentos de trabajo, ensayos, trabajos que he presentado y presentaré en desarrollo del programa de derecho son de mi autoría.

Que el trabajo de grado que en este acto presento es inédito; en consecuencia, no ha sido publicado ni puesto en consideración de proceso editorial alguno. Particularmente, se manifiesta que el trabajo no ha sido publicado ni presentado por mí, con anterioridad, para obtener título académico de pre o postgrado.

Que las fuentes primarias y secundarias que se relacionan en las Referencias o Bibliografía se encuentra efectivamente analizadas y citadas en el desarrollo de la estructura del trabajo de grado.

Que la información tomada a partir de las fuentes primarias y secundarias se encuentra rigurosamente citada, bien a partir de citas textuales o a partir del parafraseo o cualquiera otra forma específica para la citación de textos.

Que, en todo caso, he utilizado y respetado las normas sobre citas y referencias para las fuentes consultadas en la elaboración de mis artículos, documento de trabajo, ensayos o trabajos. Razón por la cual el trabajo que presento no contiene plagio total ni parcial.

Que las cifras, datos, tablas, gráficas utilizadas en mis artículos, documentos de trabajos, ensayos u otros son reales, producto de mi esfuerzo intelectual, no han sido falseados, ni alterados, ni copiados; los resultados obtenidos son aportes propios sobre el tema de investigación.

Que, de faltar a alguno de los anteriores compromisos, asumiré las consecuencias y sanciones que de mi conducta se deriven, sometiéndome a nuestro ordenamiento legal vigente y a los reglamentos de la UNIVERSIDAD.

Por medio de esta declaración exonero de toda responsabilidad en caso de incurrir en alguna conducta reprochable e ilícita, a la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA.

En señal de aceptación y libre de todo apremio y presión, suscribo en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander, a los 25 días del mes de enero del año 2019.

NATALIA ANSELMÍ GARCÉS

C.C. N° 1.090.453.646, expedida en Cúcuta (NDS)

PIEDAD SORAYA TORRES RAMÍREZ

C.C. N° 60.359.063, expedida Cúcuta (NDS)



**UNIVERSIDAD
LIBRE**
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*

NIT.: 860.013.798-5

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

San José de Cúcuta, Enero 25 de 2019

Doctor
DIEGO ARMANDO YAÑEZ
Director
Centro Seccional de Investigaciones
Universidad Libre de Colombia
Cúcuta

Ref: Aprobación disciplinar del proyecto

Cordial saludo

Por medio del presente expreso mi APROBACIÓN DISCIPLINAR del anteproyecto de Trabajo de Grado titulado LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA propuesto por las estudiantes Natalia Anselmi Garcés código 1.090.453.646 y Piedad Soraya Torres Ramírez código 60.359.063, de la Facultad de Derecho, Ciencia política y Sociales; Programa de Derecho, de la Universidad Libre de Cúcuta.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente

Dr. NELSON ORLANDO MIRANDA RUIZ
Abogado
Director del Proyecto



**UNIVERSIDAD
LIBRE**
Fundada en 1923

*La Calidad académica
un compromiso institucional*

NIT.: 860.013.798-5

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES

San José de Cúcuta, Enero 25 de 2019

Doctor
DIEGO ARMANDO YAÑEZ
Director
Centro Seccional de Investigaciones
Universidad Libre de Colombia
Cúcuta

Ref: Aprobación metodológica del proyecto de Grado

Cordial saludo

Por medio del presente expreso la APROBACIÓN METODOLOGICA del anteproyecto de Trabajo de Grado titulado LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS PLASTICAS EN COLOMBIA propuesto por las estudiantes Natalia Anselmi Garcés código 1.090.453.646 y Piedad Soraya Torres Ramírez código 60.359.063, de la Facultad de Derecho, Ciencia política y Sociales; Programa de Derecho, de la Universidad Libre de Cúcuta.

Sin otro particular me suscribo de Usted

Atentamente

LUIS ENRIQUE NIÑO OCHOA
Especialista en Investigación Social – UIS
Docente – Investigador
Universidad Libre

PÁGINA DE ACEPTACIÓN

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

San José de Cúcuta ____ de _____ del 2019

DEDICATORIA NATALIA

Hoy alcanzo una meta más en mi vida, de muchas que he cumplido y de tantas que me faltan. Con plena satisfacción y orgullo estoy a pasos de ejercer mi carrera de Derecho, camino que espero seguir recorriendo de la mano de Dios y, por supuesto de mi familia, incluyendo también a todos aquellos seres queridos que me han apoyado en este andar colmado de éxitos, bendiciones.

Este triunfo se lo dedico a mis PADRES que, gracias a su apoyo incondicional y su dedicación en mi crianza, han hecho de mí una excelente mujer, siempre destacándome por mis virtudes y cualidades afianzadas en los valores inculcados. Sin duda, de ellos heredé el amor por la abogacía, pero sobre todo la honestidad, el respeto y la colaboración hacia los demás.

Gracias RICARDO, por ser mi protector, mi amigo, mi hermano. A quien le debo y agradezco mil cosas cada día, solo le pido a Dios que sigamos unidos.

ABUELITA, como no pensar en ti, no te alcanzas a imaginar cuán afortunada me siento de tenerte, tu compañía, protección y sabios consejos, siempre han marcado mi día a día, hoy le pido al Todopoderoso que me permita seguir gozando de tu amor. Dios me ha dado la oportunidad de cuidarte y protegerte en este difícil momento, cuenta siempre conmigo abuelita Lybia.

En los logros alcanzados siempre hay ángeles que iluminan desde el cielo, y ese eres tú, tío DARÍO, seguro que hoy también estás de fiesta y celebrando este momento tan importante en mi vida, porque, aunque no me puedas acompañar, sé que me cuidarás por el resto de mis días, guiándome por el mejor camino.

Por último, y no menos importante, a todos y cada uno de mis familiares, quienes con su incondicional afecto y con su presencia, se constituyeron en el baluarte de mi esperanza y en estímulo permanente, al creer en mí, para que fuera abogada y contribuyera el día de mañana, al mejoramiento de la sociedad en la que me ha correspondido vivir, y más en estos momentos de crisis y de oscuridad moral por la que atraviesa Colombia: para ellos mi gratitud eterna, y mi compromiso con el ejercicio de una profesión que enaltece la vida comunitaria y entroniza la justicia, como concreción fundamental del Estado social y democrático de derecho. Los AMO con el alma.

DEDICATORIA SORAYA

Hoy cuando estoy culminando este nuevo reto es el momento de reconocer el generoso apoyo que muchas personas a través de estos 5 años me brindaron y a los cuales quiero manifestarles expresamente mi inmenso y eterno agradecimiento, no sin antes darle gracias a Dios por mi vida y por haberme abierto los caminos para lograr mi propósito de su mano.

A mis hermanos sustento moral no solo en estos años de estudio, sino en todo el trasegar de mi vida, sin los cuales este logro no hubiera sido posible, pues han sido siempre mi faro, mi piso, mi mayor fortaleza.

A Jaime Marthey, por creer en mí, por su apoyo y generosidad al facilitarme los medios que me permitieron hacer posible este sueño.

A Fabiana, mi hija, mi motor, mi otra mitad, mi todo, de quien recibí a diario la fuerza para no desfallecer en los momentos difíciles y por quien me levanto con más fuerza cuando vuelvo a caer.

A mis profesores de quien recibí el regalo más maravilloso: el conocimiento y a mis compañeros, en especial, Zuli, Nia, y Nata quienes con su amistad y cariño se convirtieron en mis mejores aliados y compañeros.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestra sentida gratitud, a los Doctores: Nelson Orlando Miranda Ruiz y Luis Enrique Niño Ochoa, por su aporte invaluable e irremplazable guía intelectual, preocupación, apoyo y consejos para la realización de la presente investigación, acerca de los tributos verdes que es un tema de compleja elaboración, pero que con la guía académica relacionada, obtuvo una concreción definitiva, aunque ardua y de difícil elaboración.

Agradecemos igualmente, a los docentes que durante el decurso de la carrera, nos honraron con su tiempo y sus conocimientos, para haber logrado el propósito que tuvimos, al iniciar nuestros estudios.

RESUMEN EJECUTIVO

La materia impositiva en Colombia, tiene amplia regulación, en lo que respecta a los diferentes tributos, impuestos, tasas y contribuciones, hecho que genera una relativa confianza en el manejo de las finanzas del Estado, pero dicha regulación no ha sido actualizada o entrelazada con el tema ambiental, ello genera que la necesidad de adoptar posiciones o políticas públicas que conminen más que al gobierno, al pueblo a cumplir con ciertos mínimos que al final más que una solución, en realizada aliviaran la actualidad climática en Colombia. Promesa que se ha visto truncada por la falta de voluntad política, pues la labor de los ambientalistas no se ha tenido en cuenta en el gobierno colombiano, dejando en claro que los impuestos verdes existirán, pero su destinación (inversión por recaudo en aplicación de los diferentes enfoques del derecho tributario), no será la que se esperaba, o siquiera se determina dentro de las últimas reformas, a donde irán dichos recursos. Iterando el sistema de gobernabilidad de las últimas décadas en Colombia, no siendo otro que el “garrote y la zanahoria”, hecho que no resulta un verdadero método a aplicar para desincentivar o reducir el uso de elementos contaminantes, o gravar tributariamente los recursos naturales en Colombia. Hecho que se suma a la insistente petición de mantener exentos de IVA, los combustibles fósiles en Colombia; elementos como el gas metano, butano y propano (de uso doméstico), requieren el mismo tratamiento que las energías renovables. Lo cual describe a media luz, la real utilidad del impuesto a las bolsas plásticas y sus derivados definidos como contaminantes, acorde a la Reforma Tributaria de 2016 y la fallida ley de financiamiento de 2018 que entra en vigencia desde el presente año 2019. Ello denota que la utilización de elementos reciclajes aún está muy alejado del interés o diario vivir de los ciudadanos colombianos, hecho que dista tremendamente de otros países en Europa e incluso en el continente asiático. Máxime las empresas, y los habitantes en Colombia, persisten o son renuentes a adoptar por si solos, teorías o estilos de vida más sanos, y ello empieza con las políticas públicas de reciclaje o métodos en los que se pueda incentivar de forma real o dogmática, la disminución de tales elementos contaminantes, y no ese aspecto que persiste en la realidad social, el cual es la errónea idea de obligar a los ciudadanos a no usar un producto, a través del coste económico, lo cual genera un burdo ideario de interés económico y no la real motivación a cuidar el medio ambiente.

CONTENIDO

Pág.

IDENTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Título

Planteamiento del problema

Formulación

Sistematización del problema

Justificación

Objetivos

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

Bases teóricas

Medio Ambiente

Cultura de Reciclaje

Impuestos Verdes

Bases legales

Constitución Política de 1991

Ley 1819 de 2016

Decreto 624 de 1989

Sistema Teórico

Variables

Operacionalización de las Variables

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo y método de investigación

Población y muestra

Técnicas e instrumentos para la recolección de información

Análisis de la información

Análisis de las entrevistas

Análisis Normativo

Análisis de Tratados Internacionales

Análisis Inferencial

LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA.

Importancia de la imposición del impuesto a las bolsas plásticas en el sistema normativo

Impacto Socio – Jurídico del impuesto a las bolsas plásticas

Enfoque dogmático y positivo de los impuestos verdes

Beneficios del impuesto verde a las bolsas plásticas

¿Qué es reciclaje?

¿Qué es biodegradable?

¿Resultan útiles los impuestos verdes en Colombia?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

LISTA DE ANEXOS

Pág

Anexo A. Formato de la encuesta

Anexo B. Ficha de Análisis Normativo

Anexo C. Ficha Análisis Jurisprudencial

LISTA DE CUADROS

Pág

Cuadro 1. Clases de Variables

Cuadro 2. Dimensiones, Impuestos verdes

Cuadro 3. Dimensiones, Cultura de Reciclaje

Cuadro 4. Dimensiones, Medio Ambiente

INTRODUCCIÓN

Los impuestos bajo el ideario de las finanzas públicas manejan una serie de enfoques que permiten medir en cierta forma, la aceptación, el ideario o necesidades que se perciben en la realidad social.

Dichos enfoques, pueden ser el claro reflejo de lo que las políticas públicas de un Estado u organización gubernamental en un territorio determinado, genera en sus habitantes, hecho que pocas veces es analizado en detenida perspectiva. Tal es el caso de los impuestos en Colombia, un país que es desconocido para sus propios habitantes, pues poco sentido de pertenencia o aprecio tienen sobre sus riquezas naturales o siquiera el cuidado de las mismas.

Cuidado que se debe generar por la cultura e idiosincrasia propia de un país o región, desde la sociedad, que al fin de cuentas integra el sector público, quien, a través de múltiples entidades en el sector ambiental en Colombia, fomentan, regula y vigilan la protección ambiental en consonancia con el sistema de impuestos que se van desarrollando.

Entidades del talante del Sistema Nacional Ambiental verifican el correcto funcionamiento de personas jurídicas y naturales al momento de usufructuar, manipular o extraer algún recurso natural o emplear sus labores en un territorio donde pueda verse afectado dicho ecosistema o cuyo objeto social vulnere la biodiversidad de Colombia

Por ello existe un marco normativo o jurídico que regula tal desarrollo, el cual comprende una serie de impuestos, que con la nueva tendencia un tanto corta de; ahora si prestarle atención al cambio climático y para el caso colombiano existen una serie de impuestos verdes que medianamente, buscan el mejoramiento ambiental protegiendo dichos recursos naturales.

Las precitadas regulaciones tributarias se estructuran mediante la ley 99 de 2013; a renglón seguido se incorporan otras a través de la reforma tributaria del 2016, con el impuesto al carbón y el mentado impuesto a las bolsas plásticas; pero en la última normativa conocida como la Ley de financiamiento, no se tocan o complementan las regulaciones faltantes o adicionales que permitirían exponer con total claridad sobre a donde se invertirán dichos recursos recaudados, y si dichos emolumentos serán reinvertidos en la promoción y prevención de acciones que afecten el cambio climático en Colombia, acogiendo el ejemplo de países primer mundistas y siendo ejemplo en Latinoamérica.

El ministerio de medio ambiente, como guarda de la supremacía de los recursos naturales en Colombia, aun cuando dicho guarda debería ser cada uno de los habitantes del

territorio; puesto que son los seres humanos quienes consumen los recursos naturales no renovables y renovables hasta el momento crítico de llegar a la extinción de fauna y flora; determino que el patrimonio nacional debe ser protegido y aprovechado de manera racional y sostenible.

Evidenciando la necesidad de promover y regular las condiciones mínimas, como camino a la protección del medio ambiente sano, que estipula la constitución política de 1991, toda vez que dicho tributos son impuestos; de acuerdo con los elementos de los tributos y el objetivo perseguido por el legislador, más allá de pretender verlos como una nueva categoría tributaria.

Visto así, el presente escrito compila de forma mínima, las categorías de impuestos verdes en Colombia, su regulación, que por demás adolece de múltiples falencias, dejando en claro al identificar quienes son los que están obligados a presentar y contribuir con la materia impositiva ambiental y si estas son sujetos pasivos de dichas contribuciones; los gravámenes.

Lo anterior, sin obviar que la Constitución Política de Colombia de 1991, a través del Artículo 338, definió los elementos preponderantes de la obligación tributaria, no siendo otros más que: i) el hecho generador, ii) el sujeto activo, iii) el sujeto pasivo, iv) la base gravable v) la tarifa a cancelar. Pues dicha imposición tributaria se empieza a aplicar debido al nivel de contaminación que genera el pueblo colombiano o sus habitantes, identificados como los sujetos pasivos, siendo aparentemente proporcional, entre las personas jurídicas y naturales.

IDENTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Título

LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS PLASTICAS EN COLOMBIA.

Planteamiento del problema

Ante el constante cambio climático a nivel mundial, se han tomado medidas sociales, jurídicas e incluso económicas para programar al ser humano y concientizarle sobre las múltiples afectaciones que se generan por haber descuidado por décadas el medio ambiente en el planeta tierra, máxime los recursos naturales de mayor uso, lamentablemente no son renovables, más allá de mantener la creencia que con ciencia y tecnología, se podrán regenerar tales recursos.

Es allí, donde se evidencian herramientas como el Acuerdo de París, sobre el cambio climático, instrumento que se consolidó en el año 2015, buscando avanzar en una serie de objetivos a mediano y largo plazo; siendo algunos de ellos, el control sobre la temperatura del ambiente con preponderancia a la disminución de los efectos nocivos de los gases de invernadero, la disminución en el consumo de los “*recursos naturales no renovables*”, la búsqueda retributiva con el ecosistema que permite subsistir, entre otros.

Por lo tanto, el gobierno en Colombia, toma una serie de medidas socio jurídicas, compiladas de forma modesta y en algunos casos tenue, pues dichas disposiciones jurídicas compiladas al preestablecido Estatuto Tributario Colombiano, intentan acompañar el pensamiento ambientalista mundial, a los pormenores de una sociedad latinoamericana, víctima del consumismo de una economía capitalista desprovista de toda moralidad loable con cada uno de los sujetos integrantes del planeta tierra.

Dicha adición normativa en Colombia, en materia ambiental, está sustentada en la misma constitución política de 1991, puesto que el artículo 79 superior, así lo expone, sin soslayar que los acuerdos, pactos, tratados y convenios internacionales en materia ambiental suscritos por Colombia, generan una serie de efectos vinculantes, por medio del bloque de constitucionalidad, blindando con fuerza normativa nuestra carta política y así mismos los efectos jurídicos obligatorios en materias como los Derechos Humanos, pero fomentan unas prácticas que bien desarrolladas por las políticas públicas del gobierno colombiano (sea de

turno o sus predecesores), generarían un mayor impacto socioeconómico y ambiental, mejorando las condiciones preexistentes para el conglomerado social del país.

Por ello, la reciente reforma tributaria del año 2016 en Colombia, promovida por el congreso, por los abanderados ambientalista del sector público, desarrolla conceptos tributarios del referente de los impuestos verdes, inicialmente descritos en instrumentos internacionales como el acuerdo ambiental de París del año 2015, definidos puntualmente en dos frentes, el primero, el impuesto a los combustibles fósiles, donde entran combustibles como el ACPM o la gasolina, entre otros. Toda vez que estos generan un alto nivel de contaminación y su consumo acelerado expone al planeta tierra a los desequilibrios climáticos o de constante cambio; el segundo, busca disminuir o desincentivar la utilización de bolsas plásticas, en razón a su composición química, teniendo elementos químicos como el polietileno, sumado a otros que hacen de su nivel de degradación un ambiente con un permanente deterioro y un mayor grado de contaminación.

Labor que no puede afrontar de forma aislada el planeta tierra y sus integrantes desprovistos de inteligible conocimiento sobre las afectaciones o los cientos de años que demoran al descomponerse; sin contar que dichos desechos, terminan compilándose de forma abultada en las fuentes hídricas, parques naturales y demás lugares integrantes del ecosistema ambiental del planeta tierra.

Entonces, se evidencia la necesidad de disminuir el uso de los precitados elementos (bolsas plásticas y combustibles fósiles), tal y como lo ha previsto la reforma tributaria del año 2016 en Colombia, que busca generar un impuesto o cobro adicional por el real valor de un elemento procesado por el hombre que termina siendo más peligroso de lo que preveí al no considerarse que generaría un alto nivel de contaminación al momento de su desarrollo como objeto útil para el normal transcurrir de la vida social del hombre en el planeta tierra.

Impuesto que en principio parece aportar y concientizar, pues como lo desarrolla la exposición de motivos de la reforma tributaria del año 2016 en Colombia, no solo se centra en mejorar la economía nacional, mejorar los ingresos de las empresas y ampliar la inclusión de la población más vulnerable en Colombia, siendo dicho concepto contrario en algunos elementos a la noción de ecología, pues la confrontación etimológica entre las mismas percepciones, así lo bosqueja.

Contrariedad que se suscita dentro del ambiente social y político, pues no es desmesurado indicar, que, la aberración de la corrupción, puede apoderarse de esos nuevos recursos que el Estado (Social y Democrático de Derecho) necesita para el cabal cumplimiento de los fines esenciales de rango constitucional, en idéntico sentido, se aprecia que el tasar un nuevo impuesto y seguir aumentado los tributos en Colombia, parece obedecer de un populismo tributario, que como en materia penal, solo busca aumentar las penas y

sanciones, con el fin de satisfacer la vendetta social que se gesta dentro de una sociedad como la colombiana, afectada por el conflicto social desde hace múltiples décadas.

Independientemente se tome en cuenta tales consideraciones, es pertinente describir los elementos preponderantes de dicho impuesto verde, pues es más que necesaria su aplicación, en busca de concientizar y evitar el uso excesivo de las bolsas plásticas, pues la costumbre social y la falta de cultura del reciclaje, hacen de su uso, gran incertidumbre de utilidad; dicha no será evidenciada con la simple imposición tributaria que exponen las normas motivo de análisis dentro de la presente investigación.

Surgiendo la necesidad de verificar el cumplimiento del fin y objeto plasmado en la reforma tributaria del 2016, referente al impuesto al uso de la bolsa plástica, el cual a manera real en la sociedad no se viene implementando cultura de reciclaje, el desuso de dicha bolsa que conlleve a la protección del medio ambiente y sus derivados, debido a que los enfoques del derecho tributario a lo largo de la historia, han demostrado que no suelen converger o logran el mismo fin constitucional planteado en la parte dogmática de la norma jurídica en cuestión.

Formulación del problema

¿Cómo se hace efectiva la aplicabilidad del enfoque positivo en el impuesto a la utilización de bolsas plásticas en Colombia, en la disminución de contaminación de suelos, fuentes hídricas, polución y afectación de especies, como medida de reducción y/o generación de cultura de reciclaje en los hogares colombianos?

Sistematización del problema

¿Cuáles son los fundamentos Constitucionales y legales en Colombia para la imposición del impuesto al uso de bolsas plásticas, en los distintos hogares del nivel socioeconómico y educativo?

¿Qué consecuencias jurídicas produce la implementación del impuesto a las bolsas plásticas como gestión ambiental empleada por el Gobierno Nacional en los diferentes estratos económicos de los hogares en Colombia?

¿Qué impacto conlleva en el ámbito jurídico, social y económico de los hogares en Colombia respecto de la limitación del uso de bolsa plástica, como garantía de ambiental para recuperación y restauración de los ecosistemas?

Justificación

El derecho a un ambiente sano no solo se delimita a el carácter de las normas establecidas en un país o región determinada, sino por el contrario hoy en día se vislumbra el contenido supranacional en la protección del medio ambiente, transgrediendo la barrera de las diferentes fronteras impuestas por la soberanía de cada Estado, lo cual conlleva a mitigar y/o formular proyectos encaminados en restaurar las afectaciones sufridas en los distintos ecosistemas.

En el momento en que la humanidad empezó a explotar los recursos naturales dio lugar al ingreso de recursos económicos a cada Estado o Nación, lo cual conllevó a inmiscuir la economía ambiental en los presupuestos de desarrollo. Pero, lentamente venía creciendo un flagelo de destrucción de estos recursos, generando hoy en día inmensos proyectos en aras de mitigar todas las afectaciones posibles.

Por tal motivo, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, entre otras organizaciones han venido creando políticas de protección al medio ambiente, sin excluir a Colombia la cual viene creando proyectos de mitigación del riesgo a los funcionarios del sector central y descentralizado, con base en su ordenamiento jurídico el cual consagra desde su Carta Política la importancia y respeto al derecho de un ambiente sano.

Observándose, recientemente la reforma tributaria de 2016, que trajo consigo de manera novedosa la imposición de tributos verdes; (i). al carbono; (ii). A la bolsa plástica. como mecanismo en aras de cumplir con las políticas globales de reducción de los distintos efectos contaminantes de la explotación de los recursos ambientales.

En virtud de la aplicabilidad del tributo verde a la bolsa plástica en Colombia, se hace visible cierto grado de ineficacia para el fin u objeto que fue creado, en razón a la falta de cultura de reciclaje en los hogares o en la sociedad colombiana, denotando irrisoria capacitación a las personas en el gran daño ecológico emitido por este tipo de bolsa, debiéndose incentivar su eliminación del mercado el cual no es efectivo con un simple impuesto, que a manera real cualquier persona lo cancela sin importar su aspecto negativo.

Por consiguiente, este trabajo analizará desde el sistema normativo colombiano (Constitución, leyes y tratados internacionales), las diferentes causales que conllevan a la protección del medio ambiente, destacando de esta forma los motivos, objeto y fines plasmados en la imposición al tributo verde de las bolsas plásticas en la reforma tributaria de 2016, relacionada con las políticas supranacionales en las cuales el gobierno se ha comprometido, aseverando la disminución de los diferentes emitentes contaminantes provenientes de la economía ecológica.

Es así, como se vislumbra la importancia y/o actualidad del tema de investigación en Colombia, el cual genera un referente jurídico y social en materia tributaria como garante en la protección del medio ambiente. A su vez fomenta tema de análisis en las universidades que hoy en día pregonan el cuidado del planeta, verificando sí con la imposición del impuesto a la bolsa plástica conlleva su desuso o recuperación de fuentes hídricas, suelo y demás.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la utilidad real del impuesto verde al uso de las bolsas plásticas en Colombia.

Objetivos específicos

Descomponer y analizar las diversas causales Constitucionales y legales que dieron origen a la imposición de impuesto a la bolsa plástica en Colombia en vigencia de la reforma tributaria del año 2016.

Identificar los efectos jurídicos que se causan en la imposición del impuesto de la bolsa plástica y sus beneficios al medio ambiente en la reconstrucción de los ecosistemas en Colombia.

Determinar y mencionar el impacto jurídico, social y económico que conlleva la aplicabilidad del impuesto a la bolsa plástica, como consecuencia de protección al medio ambiente (suelos, fuentes hídricas, polución y afectación de especies).

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

Al realizar la revisión no se han encontrado proyectos de grado ya terminados y relacionados con el tema; pero, contrario a lo que se creería respecto de las acciones contundentes en pro de ampliar la durabilidad del ecosistema natural o ambiente sano, al que, por designio constitucional reafirmado por la asamblea constitucional de 1991, quien indico en su exposición de motivos que se debe tener pleno acceso todos los colombianos, y no solo como colombianos, sino como ciudadanos del planeta tierra.

En consonancia con ello, es el Estado Colombiano, dotado de un territorio, una población conocida con el gerundio de colombianos y la soberanía que le permite al gobierno de turno, ejercer las políticas públicas de tipo ambiental, que si no son truncadas por los caprichos del desdeñado sistema de corrupción que se evidencia en Colombia, pueden tener un final de loable aplicación; logrando así desmitificar al desentrañable organigrama del Leviatán tal y como el mismo *Thomas Hobbes* (2007), lo describe en sus texto más representativo, pues se abordan temas puntuales, vistos a través de la cosmovisión del método inductivo; descifrando conceptos como la naturaleza del ser humano, las formas de organización del mismo y su posterior organización social.

En tal sentido, con base en el artículo 80 (Constitución Política, 1991), “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Complementado con labores como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Con apego al anterior hilo conductor, las normas internacionales aprobadas y debidamente ratificadas por el derecho interno colombiano, acogen postulados de los tratados, pactos y convenios supranacionales como el caso de la Convención interamericana para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, documento que fue proferido y aprobado en la ciudad de Washington, D.C., o de la Convención para el comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, *CITES*. Aprobado en la misma ciudad con proyección del Gobierno Suizo.

En similar sentido, convenios como los de *Viena*, para la protección de la capa de ozono en el mundo entero. Aprobado en Viena, desde el veintidós (22) de marzo de 1985, en la Secretaría General de la ONU; y otros de la talla del Protocolo de *Kyoto*, instrumento internacional que es parte integral de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Instrumento internacional que fue aprobado en la ciudad de su mismo nombre el once (11) de diciembre de 1997 y la *Declaración de Montevideo*, siendo este un acuerdo de creación del instituto interamericano para la investigación del cambio global, o como sus siglas en ingles lo indican IAI. Aprobado igualmente en la ciudad capital de Uruguay el trece (13) de mayo de 1992, presentado por la Secretaría General de la ONU.

Llegando así a reactivar desde el ámbito constitucional, disposiciones jurídicas como la (Ley 23, 1973) “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones”.

El cual se sustenta en el (Decreto Ley 2811, 1974), cuyo objetivo principal se direcciona a “prevenir, controlar la contaminación, el mejoramiento, conservación, protección y restauración de los recursos naturales renovables para así defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”.

Con lo anterior, es claro que el medio ambiente en Colombia es un bien común que hace parte del patrimonio *inmaterial de cada colombiano*, pues su conservación no debe estar sujeta a las buenas políticas públicas del Estado colombiano y el gobierno de turno que lo direcciona, sino por cada uno de los habitantes que sienten como suyo (sentido de pertenencia), ese pedazo de materia (tierra) la cual es de sustento para cualquiera que sea la actividad económica o profesional que desarrolle.

Un punto relevante a destacar, es que antes de la Constitución Política de 1991, ya se tenían como bienes susceptibles de contaminación, el aire, el agua y el mismo suelo, indistintamente sea la capa terrestre que se esté explotando o afectando.

Resulta indudable que la constitución política de 1991 gestionó una serie de herramientas de control o protección constitucional ambiental, conocidas como las acciones populares e incluso la solicitud de nulidad de actos administrativos que por causales comunes de los intereses particulares, indiscriminados y economicos de ciertos grupos de gobernantes, direccionados por capitalistas a ultranza suelen poner en riesgo los bienes comunes del pueblo Colombiano como lo es la protección al medio ambiente; y por qué no, también en casos excepcionales ciertos operadores jurisdiccionales han comprendido que la aplicación de la acción de tutela es de amplia acepción en casos de protección ambiental.

Finalmente, en los entes territoriales y en especial en los municipios del territorio colombiano, se da aplicación a la (Ley 136, 1994) “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en cuyo artículo 3º desarrolla la premisa de “planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades y solucionar las necesidades insatisfechas saneamiento ambiental”; norma jurídica que es conexa al artículo 338 de la superior.

Normas que facultan a organismos internos del municipio, como es el caso de los consejos, quienes tienen facultades impositivas y de contribución fiscal o parafiscal, facultados para fijar de forma directa los elementos de un tributo en Colombia; pues así determinan a la población sobre la que recae dicho impuesto (pueblo) y el sujeto beneficiario del mismo (Estado), las bases gravables y demás elementos indispensables en la relación impositiva tributaria, como lo son:

- ✓ Sujeto activo
- ✓ Sujeto pasivo
- ✓ Hecho generador
- ✓ Hecho imponible
- ✓ Causación
- ✓ Base gravable
- ✓ Tarifa

En este punto, no es de contrario entendimiento el hecho de que múltiples sectores del Estado, imponen emolumentos fiscales o tributarios muy inflados, los cuales generan un bajo recaudo fiscal, obligando a desarrollar en su máxima expresión el término “malicia indígena” que en Colombia suele tergiversar de una forma descomunal, pues para tales eventos el ciudadano promedio no tiene nada que envidiarle a seres super intelectuales cuyo coeficiente cerebral supera el promedio general en la humanidad.

Tal hecho hace referencia a fenómenos como la evasión y elusión; ello sin incluir la inseguridad jurídica o cambiante sistema normativo, que por demás suele ser hiperinflacionario, siendo dichas afectaciones una causal a considerar que hacen del recaudo tributario, una ambigüedad jurídica.

Bases Teóricas

Medio ambiente

El derecho a un ambiente sano se predica desde tiempo atrás, desde diversos grupos étnicos y culturales que promovían por la protección del ecosistema que habitaban, en la actualidad se vislumbra como una necesidad de carácter primordial a nivel mundial, de tal manera, distintas organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras, tienen como fin preponderante cuidar el planeta tierra de los daños masivos ocasionados por el hombre en la explotación de recursos naturales dirigidos en el desarrollo de cada Estado o Nación, estos encaminados en obtener poder económico o ser potencia en el continente o espacio territorial que se ocupa.

En Colombia se evidencia como derecho de carácter social tipificado en el artículo 79 de la Constitución Política, en donde se predica que toda persona tiene derecho a un “ambiente sano”, a su vez, se han ratificado diferentes tratados internacionales en aras de cuidar la biodiversidad de fauna y flora existente, siendo Colombia un país rico en recursos naturales, y diversidad climática. El cual busca a través de políticas públicas como; impuestos, tasas, contribuciones y tarifas, que sus habitantes se concienticen e inicien a proteger y cuidar el medio ambiente en el que viven, dejando ver en si la reforma reciente en materia tributaria de 2016, la cual trajo consigo dos nuevos impuestos verdes; i. impuesto al carbono; y ii. Impuesto a la bolsa plástica.

Cultura de Reciclaje

En una práctica que no es nueva, puesto que se evidencia a nivel cultural, social y económico entre las distintas tribus que existieron a nivel general en la tierra, que servía reciclar para obtener otros recursos que servían como medio de subsistencia, es decir, los fósiles, los excrementos, y demás, generaban un compuesto gaseoso, el cual se utilizaba en otras actividades, estas fueron dando origen a la creación de diferentes gremios industriales con un atractivo económico. Este último se evidencia como hecho notorio a nivel mundial en la explotación de recursos naturales.

Acorde a lo anterior, Colombia debido a su gran diversidad de culturas, nivel social y económico, no se predica como mayor cultura el reciclaje, es visto como algunas personas que se dedican a esta actividad, y entre otros grupos conformados en cuidar y proteger el medio ambiente indistintamente sin percibir un interés económico. Por consiguiente, el Estado a través de sus gobiernos de turno debe crear políticas en aras de incentivar la “cultura de reciclaje”, así sea por la imposición de tributos.

Impuestos Verdes

El boletín N° 249, de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nacional en Colombia, ha expresado en últimas intervenciones del año 2017, a través de su ministro estrella, el Sr. Mauricio Cárdenas Santamaría, quien aseguró que “Colombia es un país pionero en la implementación de impuestos verdes”.

El director del ministerio, expuso lo anterior, después de haber participado en IV Evento Finanzas del Clima (2017), convocado por el Departamento Nacional de Planeación, quien afirmó que “con las medidas fiscales y los apoyos que el Gobierno está dando a los empresarios, el país está trabajando para cumplir los compromisos que planteó en el Acuerdo de París”.

En idéntico sentido expuso que “el impuesto al carbono que se cobra a los combustibles fósiles, representaría \$700 mil millones anuales, que se destinan a obras de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático”. “Especialmente para reducir la erosión costera, cuidar nuestros recursos hídricos y proteger ecosistemas”. pronunciamiento que resulta loable y al mismo tiempo contradictorio, al verlo por el prístino lente del sentido de anticorrupción, que ya todo colombiano debería poseer, gracias a las múltiples vicisitudes que afectan secuencialmente al “bolsillo” de los contribuyentes.

Finalmente, el boletín hace referencia a que la intención del Ministerio es estimular a los empresarios para que inviertan en energías limpias, proyectos relacionados con producción de electricidad a partir de tecnologías eólicas o solares “tienen una exención de 15 años en el impuesto de renta”.

En dicho encuentro, se reconoció que, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, Bancoldex y Findeter, se han creado líneas de crédito en condiciones de financiamiento favorables, para el desarrollo de proyectos sostenibles. Los cuales destacan la posible eliminación de los aranceles y la disminución del IVA para los vehículos eléctricos e híbridos, con el fin de hacerlos competitivos frente a los automóviles que funcionan con combustibles fósiles.

Hecho que resulta contradictorio, si se toma en cuenta que en países del primer mundo, como el caso de Alemania, tienen presupuestado que para el 2025, el noventa (90%) por ciento de sus vehículos serán híbridos o eléctricos; proyecto que dista diametralmente de la actualidad en Colombia, donde ingresar a un concesionario de vehículos o preguntar por vehículo híbrido o eléctrico genera un gran valor en el bolsillo de los colombianos, pues los costos son muy elevados, al punto de ser un precio casi por el doble de un vehículo promedio que funciona con combustibles fósiles.

Visto así, el sistema tributario colombiano y en especial el ambiental empieza a tomar suprema relevancia nacional, pero la presente investigación intenta decantar la pomposa publicidad que de forma frenética el gobierno nacional expone como la panacea que solventara los problemas climáticos de las siguientes décadas en Colombia.

Hecho que se quiere desvirtuar mediante esta investigación, pues la costumbre legislativa y de la rama ejecutiva, parecen apelar al populismo tributario, el cual refiere que los tributos o gravámenes que son creados, van encaminados a ser una fuente de ingresos que le sirve al estado para así desarrollar el cumplimiento de los fines constitucionales, donde se consideran a las expensas como fuentes tributarias, direccionados como una carga para los contribuyentes que deben aceptarla, populismo que además va ligada a escenarios políticos que para muestra puntual de dicha mutación teórica se evidencia con las actuales noticias de los medios de comunicación, donde resaltan a los políticos tradicionales que antes de ser electos, exponen que en sus gobiernos los tributos, tasas y contribuciones no serán mayores o aumentarán y; por el contrario, todo ha de disminuir; cuando en realidad es todo lo contrario, pues no se concentran en disminuir el gasto público o invertir en otras áreas del comercio nacional e internacional, con el fin de solventar los déficit.

Hecho que se referencia, para indicar que es desconsiderado con cada colombiano trabajador, que se esfuerza por salir adelante de forma legal y sin atajos, pues el pretender creerle a un sistema político que sus impuestos han de reducirse o en otros casos ser devueltos a los sectores más desiguales, resulta una batalla mental interminable, no porque no pudiese ser posible; sino por la falta de voluntad política.

Según (Robledo, 2016) Propuestas políticas, de reducción impositiva tributaria, que no tienen real asidero en un país que lo devora la corrupción de los mismos con las mismas.

Con la referida *reforma tributaria integral*, se buscó que en Colombia empezaran a resonar de forma palpable por los colombianos, conceptos como los impuestos verdes. Liderado por el impuesto nacional al carbono, siendo este una tarifa que se le va a cobrar a los combustibles fósiles para disminuir nuestras emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), cuyo líder contaminante es dióxido de carbono.

Colombia enfrenta un reto para reducir las emisiones diarias de gases contaminantes, para estar ajustados a la meta que describe el marco del acuerdo de París, la cual fija como fecha de revisión final el 2030, es decir, en menos de doce años, con la idea de disminuir más del 10% del consumo de dichos combustibles y generar el compromiso hacia dicha fecha.

Pero una vez más se evidencia el sistema de “Garrote y zanahoria” del ejecutivo en asocio con el legislativo; y la primera expresión (Garrote) en mayúsculas, toda vez que, es la que más aplicación le suele dar el gobierno nacional, indistintamente sea o no, el de turno.

Pues los dividendos no suelen verse muy bien distribuidos o como en el caso del impuesto verde al uso de bolsas plásticas, no es socializado o incentivado de la forma que un impuesto tan benéfico como este debería hacerse, máxime toda labor que implique reducción del calentamiento global o protección a la capa de ozono, debería ser de preponderancia mayor, dado que allí mismo, órganos del estado como la Rama judicial pudieren aplicar la teoría de la conexidad de los derechos fundamentales, pues la expresión redundante en la constitución Política de 1991 “ambiente sano”, parece no tener el eco que debería.

Es por ello, que proyectos como los implementados en ciudades como Bogotá y Bucaramanga, que apoyan directamente con recursos del distrito o municipio, a los sectores de recicladores o personas de escasos recursos que, de forma curiosa en la vida, ejercen una labor plausible, puesto que el universo debería premiarles con mayor grandeza a quienes saber cuidar a sus semejantes y al planeta tierra.

Al ser este un tema de meticulosa complejidad, pues se requiere con ansias (al igual que en múltiples sectores del desarrollo económico y social del Estado colombiano), una mejor estructura del sistema tributario ambiental para consolidar los postulados de la constitución Política de 1991, acorde con los fines esenciales del Estado.

Definiendo normas marco como la que fomenta o incentiva el uso de otro tipo de objetos que cumplan la misma función de la bolsa plástica, pero con una mayor durabilidad, utilidad y de la mano del reciclaje.

Hecho que no se maneja de forma racional, puesto que el orden de aplicación en temas tributarias debería seguir una estructura que más allá de lógica, es amigable con el sentir y bolsillo del ciudadano de a pie, es decir, que los impuestos y en especial los ambientales deben condensar el objetivo primigenio de, desincentivar, pero visto ello, con la pedagogía mínima para que incluyan los sectores menos educados, y no pensemos en aquellos de bajos recursos, sino en aquellos que por el velo coto del mercantilismo o capitalismo a ultranza, suelen viciar al bien común.

Así posteriormente, desarrollar la reestructuración tributaria y en especial tributaria *verde*, en Colombia, para consolidar un verdadero recaudo sin la cuestionable elusión y evasión tributaria, que margina a los verdaderos afectados con sistemas impositivos poco constitucionalizados.

Razón por la cual, la Corte Constitucional, en (sentencia C-891, 2012), con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ha indicado la aplicación puntual del “Principio de Legalidad en materia Tributaria en Colombia”, cuyas características son:

La Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad del tributo tiene las siguientes características: (i) Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal. (ii) Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”. (iii) Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual “se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso”. (iv) Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada en el principio de “unidad económica”, especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de las asambleas departamentales o de los concejos municipales. (v) No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier tributo o contribución (en sentido amplio). No obstante, de la naturaleza del gravamen depende el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes. Así, frente a tributos de carácter nacional, el Congreso está obligado a definir todos los elementos en forma “clara e inequívoca”, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base impositiva y la tarifa. Por el contrario, tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente autoriza su creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una competencia concurrente de las asambleas departamentales o de los concejos municipales según el caso. (vi) De conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 338, no sólo el legislador, sino también las asambleas y los concejos están facultados para fijar los elementos constitutivos del tributo. (vii) La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las ordenanzas o los acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338 de la Constitución. (p. 02 y 19).

Bases Legales

Constitución política de 1991

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.

Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.

La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.

Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

Artículo 339. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 2011. El nuevo texto del inciso primero es el siguiente: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.

Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.

Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior.

Ley 1819 de 2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones

Artículo 512-15. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS. <Artículo adicionado por el artículo 207 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen.

La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla:

Año	Tarifa en pesos por bolsa
2017	\$20

2018	\$30
2019	\$40
2020	\$50

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La DIAN, certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas.

El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios).

Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común de IVA.

Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable.

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.

Parágrafo 1o. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de Ambiente deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios. También adelantará estudios sobre la caracterización de los plásticos como residuos y de las soluciones ambientales factibles para estas.

Parágrafo 2o. El Gobierno nacional reglamentará y tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental de las bolsas plásticas importadas; así como evitar una competencia desleal de bolsas importadas o de contrabando.

Parágrafo 3o. Los sujetos pasivos del mono-tributo, podrán acogerse voluntariamente al impuesto. En este caso el monto del impuesto se entenderá incluido en la tarifa fija del mono-tributo.

Artículo 512-16. Bolsas Plásticas Que No Causan El Impuesto. <Artículo adicionado por el artículo 208 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> No está sujeta a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas:

1. Aquellas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que la entrega.
2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados.
3. Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional.
4. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación.

DECRETO 624 DE 1989

*Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales*

Artículo 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. <Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 1o.> La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.

Artículo 2o. CONTRIBUYENTES. <Fuente original compilada: D. 825/78 Art. 2o.> Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial.

Artículo 3o. RESPONSABLES. Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.

Artículo 4o. SINONIMOS. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable.

Artículo 92. ACTIVOS BIOLÓGICOS. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los activos biológicos, plantas o animales, se dividen en:

1. Productores porque cumplen con las siguientes características:
 - a) Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios;

- b) Se espera que produzca durante más de un periodo;
 - c) Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario excepto por ventas incidentales de raleos y podas.
2. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción sea inferior a un año y su vocación es ser:
- a) Enajenados en el giro ordinario de los negocios, o
 - b) Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de transformación posterior.

Artículo 93. Tratamiento De Los Activos Biológicos Productores. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad observarán las siguientes reglas:

1. Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo susceptibles de depreciación.
2. El costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser depreciado será:
 - a) Para las plantas productoras: el valor de adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez;
 - b) Para los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir.
3. La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la vida útil del activo determinada de conformidad con un estudio técnico elaborado por un experto en la materia.
4. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico.

Parágrafo 1o. Los costos y gastos devengados que hayan sido tratados como costo o deducción en periodos fiscales anteriores, no podrán ser objeto de capitalización.

Parágrafo 2o. En la determinación de los costos devengados previstos en el numeral 2 de este artículo, se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en este estatuto para su procedencia.

Artículo 94. Tratamiento De Los Activos Biológicos Consumibles. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tratarán los activos biológicos consumibles como inventarios de conformidad con las reglas previstas en este estatuto para los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal.

Parágrafo. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos consumibles no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico.

Artículo 683. Espíritu De Justicia. <Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 31> Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.

Artículo 684. Facultades De Fiscalización e Investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

- a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
- b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
- c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
- d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

- e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
- f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
- g. <Literal adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

6. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.
7. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
8. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.
9. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.
10. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
11. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.
12. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental - SINA- cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.

Artículo 3.- Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Sistema teórico

Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN
IMPUESTOS VERDES	(Bedoya, 2017). “En la actualidad Colombia solo tiene 5 impuestos verdes el de Aprovechamiento forestal, utilización de aguas, vertimientos puntuales, transferencias del sector eléctrico y sobretasa a los peajes que principalmente están regulados por la ley 99 de 2013; y dos que acaban de ser incorporados mediante la reforma tributaria del 2016, el impuesto al carbono que recae principalmente en el uso de la gasolina y el impuesto al uso de las bolsas plásticas”. (Pág. 2)
CULTURA DE RECICLAJE	(Opazo Gutiérrez), La práctica del reciclaje no es una actividad reciente. Como hecho natural es tan antiguo como la producción de desechos y la existencia del hombre. Como práctica social y cultural, el reciclaje se ha convertido en una actividad industrial, impulsada por fenómenos como la crisis energética de los años setenta. Hoy además de ser una estrategia industrial y un atractivo económico, se han descubierto en el reciclaje sus ventajas ecológicas, sociales y culturales.
MEDIO AMBIENTE	(Constitución Política, 1991), artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Fuente: Natalia Anselmi & Soraya Torres. Noviembre de 2018.

Operacionalización de variables

Variable: Impuestos Verdes

DIMENSIONES	INDICADORES
FINALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Tasas, impuestos, contribuciones. • Financiamiento del Estado. • Recursos naturales. • Política ambiental. • Desarrollo sostenible.

	<ul style="list-style-type: none"> • Obligaciones, deberes, y derechos impositivos de los ciudadanos. • Limitación industrial. • Sujeto activo, pasivo, base gravable y tarifa.
--	--

Fuente: Natalia Anselmi & Soraya Torres. Noviembre de 2018.

Variable: Cultura de reciclaje

DIMENSIONES	INDICADORES
FINALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Reciprocidad económica social. • Protección del medio ambiente. • Utilidad industrial. • Imposición normativa. • Descuentos en tributos (IVA). • Participación y cooperación de ciudadanos y entes estatales. • Ciclos de la naturaleza.

Fuente: Natalia Anselmi & Soraya Torres. Noviembre de 2018.

Variable: Medio ambiente

DIMENSIONES	INDICADORES
FINALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Derecho constitucional. • Necesidad mundial. • Recursos renovables en peligro inminente. • Biodiversidad de fauna y flora. • Patrimonio nacional. • Marco normativo regulatorio.

Fuente: Natalia Anselmi & Soraya Torres. Noviembre de 2018.

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo y método de investigación

El presente trabajo tiene como fin primordial analizar los diferentes motivos o causales que dieron origen en la reforma tributaria de 2016, en la imposición del tributo a las bolsas plásticas en Colombia, y de ahí demostrar que su objeto y finalidad no se viene cumpliendo como garante en la protección del medio ambiente, lo antepuesto a través de la realización de una investigación de tipo jurídica descriptiva, mediante la aplicación del método inductivo y hermenéutico que sirvan como cimiento para llevar a cabo dicha investigación.

Esta investigación se plasma mediante la interpretación del sistema normativo (Constitución, leyes, tratados internacionales) en Colombia respetando la integración del bloque de constitucionalidad, en el estudio de la exposición de motivos, objeto y/o fines de las causales vinculadas en la imposición del impuesto a las bolsas plásticas, además de sus efectos jurídicos, sociales y económicos, el cual deja ver un criterio de desigualdad entre las personas sin importar su condición socio-económica con relación a nivel de cultura de reciclaje mediando la aceptación del desuso de dichas bolsas e interfiriendo un impacto en el cumplimiento de los principios de protección del medio ambiente.

El tipo metodológico a aplicar en el presente trabajo de investigación, será con base en regulación contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano, en correlación a la imposición del impuesto verde a las bolsas plásticas, su aplicabilidad, fin para cual fue creado, sus efectos jurídicos, sociales y su aceptación por parte de las personas desde el criterio de reciclaje.

Población y muestra

Procediendo a enfatizar que, en relación a desarrollar una investigación de forma descriptiva a través de la aplicabilidad del método hermenéutico, dicho estudio de la población y muestra se realizará de la siguiente forma:

A manera de población en general se toma, en primer orden como norma fundamental la Constitución Política de 1991 respecto a la implementación de tributos, en segundo orden el colegiado legal; Estatuto tributario, la reforma tributaria del año 2016 y en tercer orden las directivas emitidas a nivel supra nacional relacionado con los Tratados Internacionales ratificados y/o vinculados a la normatividad Colombiana Así mismo, se pretende realizar

entrevistas a personas expertas en la relación tributos y medio como mecanismo alternativo generador de cultura de reciclaje y protección del medio ambiente.

Obsérvese, en el párrafo anterior no se incluye el referente jurisprudencial emitido por las altas cortes en Colombia, debido a la novedad y/o actualidad del eje temático principal, no se ha emitido ningún pronunciamiento del mismo, vía providencia de sentencia o fallo de tutela alguno.

Análisis de la información

Análisis de las entrevistas

Entrevistado (a): Gloria Maribel Torres Ramírez¹
Keyla Yuliza Ramírez Pedrozo²
Claudia Eloísa Villamarín Martínez³

Entrevistador: Natalia Anselmi Garcés y Piedad Soraya Torres Ramírez.

Objeto: Información utilizada únicamente como ayuda académica para la elaboración del proyecto de grado.

1. ¿Conceptualice la aplicabilidad en el ordenamiento jurídico de los impuestos verdes en Colombia?

G.MT.R. A partir de la vigencia de la ley 99 de 1993 que reordenó el Ministerio de Medio Ambiente y creó el Sistema Nacional Ambiental se pusieron en la agenda pública los principios ambientales dándole un mayor peso al tema y promoviendo el desarrollo sostenible.

En la actualidad Colombia solo tiene 7 impuestos verdes: el de Aprovechamiento forestal, utilización de aguas, vertimientos puntuales, transferencias del sector eléctrico y sobretasa a los peajes que principalmente están regulados por la ley 99 de 1993; y dos que

¹ Gloria Maribel Torres Ramírez. Abogada egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, Especialista en Contratación Estatal.

² Keyla Yuliza Ramírez Pedrozo. Estudiante de decimo semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander.

³ Claudia Eloísa Villamarín Martínez. Abogada. Magister en Derecho para el urbanismo y el desarrollo territorial sostenible.

fueron recientemente incorporados mediante la reforma tributaria del 2016: el impuesto al carbono y el del uso a las bolsas plásticas

K.Y.R.P. Debido a las acciones antrópicas actualmente se ve reflejado las graves consecuencias de los impactos ambientales que trajeron consigo estas. En el 2016 Colombia presenta su reforma tributaria el cual incluye “los impuestos verdes”, son medidas que adopta el gobierno, ya que debe dar cumplimiento a los objetivos ambientales para la conservación y protección del patrimonio natural del país.

C.E.V.M. Considero que los impuestos verdes en Colombia se constituyen en una alternativa que busca la protección al medio ambiente de ciertas zonas afectadas por el conflicto con una destinación específica y en beneficio del ecosistema teniendo en cuenta los parámetros o directrices que establezca el Ministerio de Ambiente para favorecer un desarrollo sostenible, es decir, protegiendo a las futuras generaciones.

2. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma tributaria del 2016 y sabe usted que trajo consigo sobre protección del medio ambiente?

G.MT.R. La reforma implementada a través de la Ley 1819 de 2016, desde el punto de vista ambiental considero que tuvo un avance importante en dos temas que, aunque no pareciera, impactan gravemente en la sostenibilidad ambiental. El primero tiene que ver con el impuesto al carbono encaminado a reducir la emisión de gases efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles en el país y el segundo el impuesto al uso de las bolsas plásticas, dos acciones que impacta positivamente la calidad del aire por un lado y el ambiente.

K.Y.R.P. La problemática más preocupante en el mundo es la de los plásticos, la reforma tributaria del 2016 trajo consigo los impuestos verdes, uno de ellos fue el de las bolsas plásticas, empezar a cobrar estas para destinar los recursos para utilizar mejores tecnologías y mitigar los impactos ambientales que traen las bolsas plásticas, no ha sido tan efectivo este pero de una u otra manera ha reducido un poco el uso de estas, el problema está en la cultura de las personas, en la falta de conocimiento. Pero estas medidas de los impuestos no bastan, hay que tomar medidas drásticas e implementar proyectos para cambiar el país, mejorar la educación, porque la ignorancia es la que nos está haciendo destruir nuestro patrimonio natural.

C.E.V.M. La reforma tributaria del año 2016 lo que pretendía era hacer unas modificaciones en cuanto a quienes tributaban impuestos como el de Renta incluyendo a personas naturales con ingresos mucho más bajos de los valores que para antes de la reforma ya estaban, así como ese otros fueron los cambios y empieza a incluir el llamado Impuesto Verde, es decir, ya se piensa en el medio ambiente, buscando una serie de salidas referentes

al recaudo de aquellos impuestos que van a permitir dar un manejo en pro de un desarrollo sostenible para los habitantes del país. Hay que recordar que la constitución política de 1991 es calificada por algunos como la constitución verde, lleva inmerso en ella ese derecho a un medio ambiente sano y que el Estado debe entrar a tutelar a través de los diferentes mecanismos establecidos por él mismo. En mi criterio la reforma es buena.

3. ¿Cuál es la finalidad de implementar el impuesto a las bolsas plásticas en Colombia?

G.MT.R. Inicialmente la finalidad fue la de mitigar el impacto ambiental negativo que el uso y disposición de las mismas está causando a mares, ríos, suelos, cuerpos de agua, etc., por la no biodegradabilidad del plástico. La segunda fue la de “impactar la conciencia” ciudadana no sólo llamando la atención sobre el daño que hacemos al planeta con el uso indiscriminado de ellas, sino también afectando nuestro bolsillo. A través de esta iniciativa, no sólo se empezó a mover más rápidamente el uso de bolsas biodegradables y reutilizables, sino que también obliga a los productores de bolsas a buscar otras alternativas y materias primas menos dañinas con el medio ambiente.

K.Y.R.P. Conservación y protección del medio ambiente, destinar esos recursos para usar mejores alternativas y mitigar así los impactos ambientales.

C.E.V.M. La finalidad es que los compradores de productos de establecimientos de comercio no utilicen las bolsas plásticas sino de implementar bolsas de tela entre otra calidad de bolsas y menos bolsas plásticas. Y serán los establecimientos de comercio los que cobren el impuesto a quienes las deseen adquirir. En síntesis, es “Es desestimular el uso de la bolsa plástica”.

4. ¿Con la creación del impuesto a la bolsa plástica en Colombia se evidencia la disminución de su consumo?, ¿sí - no y por qué?

G.MT.R. Considero que, con la creación y aplicación del impuesto, si se da la disminución del consumo, de acuerdo con los datos emanados del DANE e informes de prensa.

K.Y.R.P. Si ha reducido, pero no de manera significativa como se esperaba, hay que tener más alternativas, el problema está en la cultura.

C.E.V.M. Sí se evidencia, lo que pasa es que en el país falta más cultura para entender este tipo de procesos, mientras las personas se adaptan a que deben llevar al supermercado su propia bolsa pasara un tiempo bastante largo para que logre entender la finalidad del impuesto.

5. ¿Considera usted que es importante implementar cultura de reciclaje y protección al medio ambiente mediante un impuesto? ¿si - no y por qué?

G.MT.R. Lo ideal sería que la concientización ambiental de manera autónoma y voluntaria, pero en vista de que no asumimos posiciones responsables como ciudadanos, debe el Estado entrar a imponer estos tributos. La cultura del reciclaje y Protección al medio ambiente debe no solo continuarse, sino consolidarse a través de todos los mecanismos posibles, incluyendo cargas tributarias.

K.Y.R.P. No necesariamente, el impuesto es una opción, pero se puede implementar de importancia proyectos que lleguen a cada rincón del país, en cuestión de educación ambiental, si tenemos conocimiento haremos mejor las cosas.

C.E.V.M. Sí, considero que se debe hacer por cuanto este proceso en el que se busca proteger el medio ambiente empieza por casa y sigue la cadena de proceso con los lugares de trabajo, los colegios y demás instituciones, es decir vincular a toda la sociedad.

6. ¿Con la implementación del impuesto a la bolsa plástica se vislumbra beneficios para el quien recibe el impuesto, y no para el medio ambiente? ¿si - no y por qué? Argumente su respuesta.

G.MT.R. En la medida en que lo recaudado vaya al presupuesto general y no tenga destinación específica para la implementación de acciones directas de mitigación contra el cambio climático, pues no será el ambiente el directamente beneficiado.

K.Y.R.P. Estas medidas se implementan con el fin de conservar y preservar el medio ambiente, actualmente esta problemática nos impacta a todos, ya que, si no se conserva y protege el medio ambiente de que dependeremos, si ya no tenemos recursos naturales, las medidas que se tomen en cuestión de todos, porque de ahí depende la existencia del ser humano.

C.E.V.M. El beneficiado es el establecimiento de comercio, lo importante ahí es que quienes recaudan el impuesto lo hagan conscientes de que ellos de alguna u otra manera deben contribuir a que se proteja el medio ambiente pues es tarea de todos hacerlo.

7. ¿Enuncie una opinión sobre si sería viable en la actualidad, modificar el objeto y finalidad del impuesto verde a las bolsas plásticas en Colombia? Argumente su respuesta.

G.MT.R. Las leyes siempre serán susceptibles de modificación. En el momento creo que no es necesario realizar modificación a la norma.

K.Y.R.P. se deben tomar medidas drásticas, modificar el impuesto es una opción, hay alternativas más viables, que cobrar por una bolsa plástica, con esta medida se impacta a las personas, pero no tan significativamente como debería ser, y también se debe tener en cuenta si verdaderamente estos recursos se están usando para mitigar los impactos ambientales.

C.E.V.M. Para mí sí, finalmente hay que tener en cuenta cuanto tiempo dura la bolsa plástica en desintegrarse, existe la política para la Gestión Integral de Residuos, donde la finalidad es desincentivar la utilización de las bolsas plásticas que en mi opinión allá es donde se debe llegar. Para finalizar yo insisto que esto es un proceso cultural que en otros países se viene aplicando y que Colombia ya no es ajeno a ello, por eso esto para mi arranca por casa.

Análisis Normativo

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO			
Título	Constitución Política de Colombia de 1991		
Objeto de la Norma	en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia.		
Fecha de Promulgación	20 de julio de 1991	Diario Oficial	Gaceta Constitucional No. 116
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p style="text-align: center;">TITULO I. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</p> <p>Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.</p>		

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

(...)

Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.

Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.

	Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior.
Análisis del Contenido	
Del presente articulado de la norma de normas en Colombia, se extractan los presupuestos constitucionales para la consecución de los fines esenciales del sistema jurídico que se engloba dentro del Estado colombiano. En idéntico sentido se delimitan los límites supra legales con los que el Congreso reglamentará la materia tributaria en Colombia, por demás necesaria, bajo la previsión de abusos normativos que impidan el efectivo actuar de la Ley y afecten a los habitantes del territorio, por acción o por omisión de una norma que no proteja esos derechos fundamentales, constitucionales y de rango convencional.	
Análisis crítico	La norma superior, permite entrever el pensamiento del legislador primario o constituyente, quien de forma mancomunada, sentó las bases del sistema normativo en Colombia.

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO			
Título	Ley 1819 de 2016		
Objeto de la Norma	Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones		
Fecha de Promulgación	29 de diciembre de 2016	Diario Oficial	No. 50.101
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p>Artículo 512-15. IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLÁSTICAS. <Artículo adicionado por el artículo 207 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen.</p> <p>La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla:</p> <p>Año Tarifa en pesos por bolsa</p>		

	<p>2017 \$20</p> <p>2018 \$30</p> <p>2019 \$40</p> <p>2020 \$50</p> <p>Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La DIAN, certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas.</p> <p>El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios).</p> <p>Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común de IVA.</p> <p>Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable.</p> <p>El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.</p> <p>Parágrafo 1o. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de Ambiente deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios. También adelantará estudios sobre la caracterización de los plásticos como residuos y de las soluciones ambientales factibles para estas.</p> <p>Parágrafo 2o. El Gobierno nacional reglamentará y tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental de las bolsas plásticas importadas; así como evitar una competencia desleal de bolsas importadas o de contrabando.</p>
--	--

	<p>Parágrafo 3o. Los sujetos pasivos del mono-tributo, podrán acogerse voluntariamente al impuesto. En este caso el monto del impuesto se entenderá incluido en la tarifa fija del mono-tributo.</p> <p>Artículo 512-16. Bolsas Plásticas Que No Causan El Impuesto. <Artículo adicionado por el artículo 208 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> No está sujeta a este impuesto la entrega de las siguientes bolsas plásticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aquellas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que la entrega. 2. Las que sean utilizadas como material de empaque de los productos pre-empacados. 3. Las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional. 4. Las bolsas reutilizables que conforme a la reglamentación del Gobierno nacional posean unas características técnicas y mecánicas que permiten ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación.
Análisis del Contenido	
El presente articulado, describe el tipo de material o bolsa a considerar como posible contaminante, dejando sentada la intención de desestimular su uso, bajo un sistema de “garrote”, al adicionarle un costo aparentemente mayor a este tipo de productos, pero generando una serie de posibilidades adicionales a su uso y restando ampliar su contenido normativo.	
Análisis crítico	El contenido normativo de forma inicial genera varios interrogantes o vacíos legales que pudieran ser interpretados de forma errónea, requiriéndose una adición normativa.

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO	
Título	DECRETO 624 DE 1989
Objeto de la Norma	Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales

Fecha de Promulgación	30 de marzo de 1989	Diario Oficial	No. 38.756
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p>Artículo 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. <Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 1o.> La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.</p> <p>Artículo 2o. CONTRIBUYENTES. <Fuente original compilada: D. 825/78 Art. 2o.> Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial.</p> <p>Artículo 3o. RESPONSABLES. Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.</p> <p>Artículo 4o. SINONIMOS. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente y responsable.</p> <p>Artículo 92. ACTIVOS BIOLÓGICOS. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Los activos biológicos, plantas o animales, se dividen en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Productores porque cumplen con las siguientes características: <ol style="list-style-type: none"> a) Se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas o pecuarios; b) Se espera que produzca durante más de un periodo; c) Existe una probabilidad remota de que sea vendida como producto agropecuario excepto por ventas incidentales de raleos y podas. 2. Consumibles porque proceden de activos biológicos productores o cuyo ciclo de producción sea inferior a un año y su vocación es ser: 		

	<p>a) Enajenados en el giro ordinario de los negocios, o</p> <p>b) Consumidos por el mismo contribuyente, lo cual comprende el proceso de transformación posterior.</p> <p>Artículo 93. Tratamiento De Los Activos Biológicos Productores. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad observarán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los activos biológicos productores serán tratados como propiedad, planta y equipo susceptibles de depreciación. 2. El costo fiscal de los activos biológicos productores, susceptible de ser depreciado será: <ol style="list-style-type: none"> a) Para las plantas productoras: el valor de adquisición de la misma más todos los costos devengados hasta que la planta esté en disposición de dar frutos por primera vez; b) Para los animales productores: el valor de adquisición del mismo más todos los costos devengados hasta el momento en que esté apto para producir. 3. La depreciación de estos activos se hará en línea recta en cuotas iguales por el término de la vida útil del activo determinada de conformidad con un estudio técnico elaborado por un experto en la materia. 4. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos productores no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico. <p>Parágrafo 1o. Los costos y gastos devengados que hayan sido tratados como costo o deducción en periodos fiscales anteriores, no podrán ser objeto de capitalización.</p>
--	---

	<p>Parágrafo 2o. En la determinación de los costos devengados previstos en el numeral 2 de este artículo, se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en este estatuto para su procedencia.</p> <p>Artículo 94. Tratamiento De Los Activos Biológicos Consumibles. <Artículo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tratarán los activos biológicos consumibles como inventarios de conformidad con las reglas previstas en este estatuto para los inventarios, dicho tratamiento corresponderá a su costo fiscal.</p> <p>Parágrafo. Todas las mediciones a valor razonable de los activos biológicos consumibles no tendrán efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de la enajenación del activo biológico.</p> <p>Artículo 683. Espíritu De Justicia. <Fuente original compilada: L. 52/77 Art. 31> Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.</p> <p>Artículo 684. Facultades De Fiscalización e Investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.</p> <p>Para tal efecto podrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
--	---

	<p>c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.</p> <p>d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.</p> <p>e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.</p> <p>f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.</p> <p>g. <Literal adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos.</p>
Análisis del Contenido	
Con el estatuto tributario, se enuncian las formulas tributarias y legales a aplicar, sus sujetos y objetos de la norma, con el fin de recaudar los recursos básicos del Estado, a través del sistema impositivo o gravable de las tasas, tributos, impuestos y demás contribuciones legales que el Congreso ha considerado indispensables para el sostenimiento social y cumplimiento de los fines esenciales en Colombia, acorde a la carga constitucional.	
Análisis crítico	De forma genérica, sus modificaciones e inclusiones normativas de tipo ambiental, intentan ajustarse a los intereses del Estado Social de Derecho, más allá de la falta de convicción política y preocupación por el cambio climático, pues como se evidencia de la lectura del articulado seleccionado, los impuestos indicados adolecen de una mayor respuesta social.

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO			
Título	Ley 1943 de 2018 de financiamiento. (Reforma tributaria)		
Objeto de la Norma	"Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones".		
Fecha de Promulgación	Diciembre de 2018	Diario Oficial	Nº 59.831
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	Ningún artículo en relación con los impuestos verdes.		
Análisis del Contenido			
Dentro del articulado se excluyen los impuestos verdes, hecho que resulta contradictorio, puesto que, en la anterior norma o reforma tributaria, se había dejado sentado el precedente de gravar a la población con ciertos impuestos que generen la cultura del reciclaje, o en su defecto, desincentiven el uso de materiales contaminantes y de difícil reutilización.			
Análisis crítico	Se había contemplado que esta Ley dirimiera de una vez por todas a dónde se iría el dinero del impuesto a las bolsas plásticas, y haber incluido al carbón dentro de los combustibles fósiles gravados en el impuesto al carbono, pero una vez más pudo más el interés particular del sector político, que la imperiosa necesidad de cuidar el medio ambiente indica.		

Análisis de Tratados Internacionales

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	DECLARACIÓN DE BARILOCHE		
Objeto Tratado	Declaración del segundo congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas.		
Fecha de Promulgación	Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2007	Diario Oficial	Nº 41.893
Artículos importantes para el desarrollo de	Los más de dos mil doscientos participantes en este Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del 2007 personificamos una amplia gama de variados intereses: gestores de áreas		

la investigación	<p>protegidas, representantes de gobiernos nacionales y locales y de organismos de integración regional, organizaciones civiles dedicadas a la conservación de la naturaleza y desarrollo social, organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, científicos y académicos, así como empresarios privados; igualmente, compartimos una preocupación y un compromiso común.</p> <p>Teniendo en cuenta que esta declaración no tendría impacto alguno sin un decidido apoyo y una voluntad para promover y ejecutar acciones nos comprometemos a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demostrar y comunicar, con argumentos ambientales, sociales, culturales y económicos derivados de los resultados de la investigación y el conocimiento tradicional, el papel insustituible de las áreas protegidas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la aplicación de importantes Acuerdos Ambientales Multilaterales (Convención de Diversidad Biológica, Convención de Patrimonio Mundial, Convención sobre Especies Migratorias, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Tratado Antártico) e instamos a los Estados al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en estos marcos. 2. Instar a los gobiernos de Latinoamérica y a los organismos de integración regional, que reconozcan el papel fundamental de las áreas protegidas en las estrategias de adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación y la promoción de estrategias regionales de monitoreo, mitigación y adaptación a estos fenómenos. 3. Revitalizar la atención de la región sobre el Tratado Antártico, sugiriendo su carácter permanente como área protegida internacional donde muchos países de la región mantienen una responsabilidad de presencia permanente, cumpliendo con el acuerdo que legitima su participación, especialmente frente a la amenaza del cambio climático y los intereses económicos emergentes. 4. Exhortar a los gobiernos, a la cooperación internacional, y a la sociedad civil, para que en el período de 2008-2018, acuerden metas presupuestarias anuales concretas e implementen las reformas legales y administrativas necesarias, que cierren las brechas financieras identificadas en los planes de sostenibilidad financiera de los sistemas de parques nacionales desarrollados dentro del programa de trabajo de la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB . 5. Impulsar la
------------------	---

	<p>consolidación de la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas proponiendo mecanismos atractivos y tangibles complementarios a los financiamientos fiscales otorgados por los gobiernos en cumplimiento de su función indelegable 6. Velar por que los compromisos y acuerdos comerciales y de desarrollo económico, y las iniciativas de Infraestructura, no afecten negativamente las áreas protegidas y menoscaben las posibilidades de alcanzar los objetivos de conservación y apoyo al desarrollo por los cuales fueron creadas asegurando el cumplimiento de las convenciones internacionales que tienen carácter vinculante para nuestros países. 7. Apoyar y promover la aplicación de los estudios y evaluaciones encaminados a alcanzar una mejor representatividad en el sistema Latinoamericano de áreas protegidas con especial atención a fortalecer la conservación del medio marino y los ecosistemas interiores de agua dulce. 8. Instar a que los gobiernos declaren el período 2008 – 2018 como la Década de las Áreas Marinas Protegidas, priorizando en Latinoamérica la creación de redes nacionales y regionales de áreas marinas protegidas y la gestión integrada de los océanos para cumplir con los compromisos de alcanzar las metas del 2012 y 2015. Es prioritario incrementar durante este decenio el número y la superficie de las áreas marinas protegidas en la región, tanto en las Zonas Costeras como en Alta Mar, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y procesos marinos, a su manejo integrado y al mantenimiento de las pesquerías sostenibles. 9. Desarrollar y promover formas de colaboración binacional, subregional o regional para el desarrollo, la planificación y el manejo colaborativo de áreas protegidas colindantes en zonas de frontera y de sistemas binacionales o subregionales de áreas protegidas. 10. Impulsar y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y de estrategias innovadoras de generación de ingresos para alcanzar el financiamiento sostenible de las áreas protegidas; incluyendo un mayor uso de oportunidades y mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos. 11. Promover y aplicar evaluaciones de efectividad de manejo de las áreas protegidas como mecanismo para reducir las amenazas que éstas enfrentan y como herramienta para mejorar la gestión tanto de áreas protegidas individuales como de sistemas y subsistemas nacionales de áreas protegidas, especialmente en el marco del Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas establecido por la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB como herramienta fundamental para lograr sistemas de áreas protegidas viables. 12. Promover una mayor difusión del Enfoque Ecosistémico y del rol de Areas Protegidas en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y la articulación de las AP con los</p>
--	--

	<p>paisajes circundantes. Identificar a diferentes escalas la vulnerabilidad de las AP al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos como los páramos y otros ecosistemas como los humedales y los ecotonos marinos de interfase. Es urgente desarrollar investigaciones aplicadas a AP vulnerables para contribuir hacia una mayor resiliencia de ecosistemas claves que podrían verse afectados por el cambio climático.</p>
Análisis del Contenido	
<p>Se percibe la preocupación que el impacto del cambio climático genera, en forma de cambios en el régimen de temperatura y precipitación, así como las consecuentes variaciones en los patrones de distribución de biomas y especies, constituye una nueva amenaza para las áreas protegidas de Latinoamérica. Resultando más que coherente desarrollar acciones que permitan identificar a diferentes escalas, la vulnerabilidad de las áreas protegidas al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos y diseñar sistemas de indicadores y monitoreo particulares.</p>	
Análisis crítico	<p>El presente tratado, busca consolidar el sistema de protección de parques naturales, a través de la expedición de estudios que puedan ser elevados a norma jurídica, con el fin de darle la categoría de espacio natural protegido, con su fauna y flora.</p>

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	LEY 74 DE 1979		
Objeto Tratado	Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978.		
Fecha de Promulgación	30 de abril de 1980	Diario Oficial	No. 35.447
Artículos importantes para el desarrollo de	<p>Artículo 1o. Apruébase el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978, que dice:</p> <p>TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA</p>		

la investigación	<p>Las Repúblicas de Bolivia, del Brasil, de Colombia, del Ecuador, de Guyana, del Perú, de Suriname y de Venezuela,</p> <p>Conscientes de la importancia que para cada una de las Partes tienen sus respectivas regiones amazónicas como parte integrante de sus territorios, Animadas del común propósito de conjugar los esfuerzos que vienen emprendiendo, tanto en sus respectivos territorios como entre sí mismas, para promover el desarrollo armónico de la Amazonía, que permita una distribución equitativa de los beneficios de dicho desarrollo entre las Partes Contratantes, para elevar el nivel de vida de sus pueblos y a fin de lograr la plena incorporación de sus territorios amazónicos a las respectivas economías nacionales,</p> <p>Convencidas de la utilidad de compartir las experiencias nacionales en materia de promoción del desarrollo regional,</p> <p>Considerando que para lograr un desarrollo integral de los respectivos territorios de la Amazonía es necesario mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente,</p> <p>Conscientes de que tanto el desarrollo socio - económico como la preservación del medio ambiente son responsabilidades inherentes a la soberanía de cada Estado, y que la cooperación entre las Partes Contratantes servirá para facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades, continuando y ampliando los esfuerzos conjuntos que están realizando en materia de conservación ecológica de la Amazonía,</p> <p>Seguras de que la cooperación entre las naciones latinoamericanas en materias específicas que les son comunes contribuye al avance en el camino de la integración y solidaridad de toda la América Latina,</p> <p>Persuadidas de que el presente Tratado significa la iniciación de un proceso de cooperación que redundará en beneficio de sus respectivos países y de la Amazonía en su conjunto,</p> <p>Resuelven suscribir el presente Tratado:</p> <p>Artículo 1o. Las Partes Contratantes convienen en realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos, de manera que esas acciones conjuntas produzcan resultados equitativos y mutuamente provechosos, así como para la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios.</p> <p>Parágrafo único: Para tal fin, intercambiarán informaciones y concertarán acuerdo y entendimientos operativos, así como los</p>
------------------	---

	<p>instrumentos jurídicos pertinentes que permitan el cumplimiento de las finalidades del presente Tratado.</p> <p>Artículo 2o. El Presente Tratado se aplicará en los territorios de las Partes Contratantes en la Cuenca Amazónica, así como también en cualquier territorio de una Parte Contratante que, por sus características geográficas, ecológicas o económicas, se considere estrechamente vinculado a la misma.</p> <p>Artículo 3o. De Acuerdo con y sin detrimento de los derechos otorgados por actos unilaterales, de lo establecido en los tratados bilaterales entre las Partes y de los principios y normas del Derecho Internacional, las Partes Contratantes se aseguran mutuamente sobre la base de reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales, observando los reglamentos fiscales y de policía establecidos o que se establecieren en el territorio de cada una de ellas. Tales reglamentos deberán, en lo posible, favorecer esa navegación y el comercio y guardar entre sí uniformidad.</p> <p>Parágrafo único: El presente artículo no será aplicable a la navegación de cabotaje.</p>
Análisis del Contenido	
Teniendo en cuenta la creciente necesidad de que el aprovechamiento de la flora y de la fauna de la Amazonía, sea protegida, y racionalmente empleada por los ciudadanos o habitantes del territorio amazónico, se expide la presente normativa, que se une a otras donde los pueblos indígenas pueden materializar sus derechos.	
Análisis crítico	Las decisiones y compromisos a los que las partes contratantes en el presente acuerdo internacional indican, son la muestra fehaciente de la preocupación por mantener un ambiente sano.

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	LEY 464 DE 1998		
Objeto Tratado	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales", hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).		
Fecha de Promulgación	4 de agosto de 1998	Diario Oficial	Nº 43.360

<p>Artículos importantes para el desarrollo de la investigación</p>	<p style="text-align: center;">CAPITULO I. OBJETIVOS.</p> <p>Artículo 1o. OBJETIVOS. Reconociendo la soberanía de los miembros sobre sus recursos naturales, definida en el apartado a) del Principio 1 de la Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 1994 (denominado en adelante "el presente Convenio"), son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proporcionar un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas entre todos los miembros en relación con todos los aspectos pertinentes de la economía mundial de la madera; b) Proporcionar un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el comercio de maderas; c) Contribuir al proceso del desarrollo sostenible; d) Aumentar la capacidad de los miembros para aplicar una estrategia para conseguir que para el año 2000 las exportaciones de maderas tropicales y productos de estas maderas provengan de recursos forestales ordenados de forma sostenible; e) Fomentar la expansión y la diversificación del comercio internacional de maderas tropicales provenientes de recursos forestales ordenados de forma sostenible mediante el mejoramiento de las condiciones estructurales de los mercados internacionales, teniendo en cuenta, por una parte, el aumento a largo plazo del consumo y la continuidad de los suministros, y, por otra, unos precios que incluyan los costos del desarrollo sostenible y que sean remuneradores y equitativos para los miembros, así como el mejoramiento del acceso al mercado; f) Fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo con miras a mejorar la ordenación de los bosques y la utilización eficiente de las maderas, así como a aumentar la capacidad para conservar y fomentar otros valores forestales en los bosques tropicales productores de madera; g) Desarrollar mecanismos para proporcionar los recursos nuevos y adicionales y los conocimientos técnicos especializados que sean necesarios a fin de aumentar la capacidad de los miembros productores para lograr los objetivos del presente Convenio y contribuir a esos mecanismos; h) Mejorar la información sobre el mercado con miras a lograr una mayor transparencia del mercado internacional de las maderas, incluidas la
---	---

	<p>reunión, la clasificación y la difusión de datos sobre el comercio, inclusive datos sobre las especies comercializadas;</p> <p>i) Fomentar una elaboración mayor y más avanzada de las maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible en los países miembros productores con miras a promover su industrialización y aumentar así sus oportunidades de empleo y sus ingresos de exportación;</p> <p>j) Alentar a los miembros a apoyar y desarrollar las actividades de repoblación y ordenación de los bosques de maderas tropicales industriales, así como la rehabilitación de las tierras forestales degradadas, teniendo presente los intereses de las comunidades locales que dependen de los recursos forestales;</p> <p>k) Mejorar la comercialización y la distribución de las exportaciones de maderas tropicales extraídas de recursos forestales ordenados de forma sostenible;</p> <p>l) Alentar a los miembros a elaborar políticas nacionales encaminadas a la utilización sostenible y la conservación de los bosques productores de maderas y de sus recursos genéticos y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las regiones interesadas, en el contexto del comercio de maderas tropicales;</p> <p>m) Promover el acceso a las tecnologías y su transferencia y a la cooperación técnica para llevar a la práctica los objetivos del presente Convenio, inclusive en las condiciones favorables y preferenciales que se determinen de común acuerdo; y</p> <p>n) Estimular el intercambio de información sobre el mercado internacional de las maderas.</p> <p style="text-align: center;">CAPITULO II. DEFINICIONES.</p> <p>Artículo 2o. DEFINICIONES. A los efectos del presente Convenio:</p> <p>1. Por "maderas tropicales" se entiende las maderas tropicales para usos industriales de especies no coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La expresión incluye los troncos, las tablas, las chapas y la madera contrachapada. Esta definición también comprende la madera contrachapada que contenga en parte madera de coníferas de procedencia tropical.</p> <p>2. Por "elaboración más avanzada" se entiende la transformación de troncos en productos primarios de madera, productos semielaborados</p>
--	--

	<p>o productos acabados hechos totalmente o casi totalmente de maderas tropicales.</p> <p>3. Por "miembro" se entiende todo gobierno, o cualquiera de las organizaciones intergubernamentales a que se refiere el artículo 5o., que haya consentido en obligarse por el presente Convenio, tanto si está en vigor con carácter provisional como si lo está con carácter definitivo.</p> <p>4. Por "miembro productor" se entiende todo país con recursos forestales tropicales y/o exportador neto de maderas tropicales en términos de volumen que está enumerado en el anexo A y que pase a ser parte en el presente Convenio, o todo país con recursos forestales tropicales y/o exportador neto de maderas tropicales en términos de volumen que no está enumerado en dicho anexo y que pase a ser parte en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado miembro productor por el Consejo.</p> <p>5. Por "miembro consumidor" se entiende todo país enumerado en el anexo B que pase a ser parte en el presente Convenio o todo país no enumerado en dicho anexo que pase a ser parte en el presente Convenio y que, con su consentimiento, haya sido declarado miembro consumidor por el Consejo.</p> <p>6. Por "Organización" se entiende la Organización Internacional de las Maderas Tropicales establecida conforme al artículo 3o.</p> <p>7. Por "Consejo" se entiende el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales establecido conforme al artículo 6o.</p> <p>8. Por "votación especial" se entiende una votación que requiera al menos dos tercios de los votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y al menos el 60% de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y votantes, contados por separado, con la condición de que tales votos sean emitidos por lo menos por la mitad de los miembros productores presentes y votantes y por lo menos por la mitad de los miembros consumidores presentes y votantes.</p> <p>9. Por "votación de mayoría distribuida simple" se entiende una votación que requiera más de la mitad de los votos emitidos por los miembros productores presentes y votantes y más de la mitad de los votos emitidos por los miembros consumidores presentes y votantes, contados por separado.</p> <p>10. Por "ejercicio económico" se entiende el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre, ambos inclusive.</p> <p>11. Por "monedas libremente utilizables" se entiende el dólar estadounidense, el franco francés, la libra esterlina, el marco alemán,</p>
--	--

	el yen japonés y cualquier otra moneda que, por designación en cualquier momento de una organización monetaria internacional competente, sea una moneda que se utilice efectiva y ampliamente para realizar pagos por transacciones internacionales y se negocie efectiva y ampliamente en los principales mercados de divisas.
Análisis del Contenido	
Esta Ley, así como el Convenio por ella aprobado, fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-200 de 1999. El Congreso de Colombia Visto el texto del "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales", hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Lo cual indica su veracidad y legalidad, puesto que el sistema constitucional de control aplicado a los tratados internacionales antes o después de la constitución de 1991, así lo requieren.	
Análisis crítico	El presente instrumento delimita los tipos de flora y variedades nativas de vegetación que se encuentran dentro de los límites de extinción y protección natural, para buscar mecanismos de protección y evitar la deforestación sin control alguno.

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL		
Título	Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)	
Objeto Tratado	“la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.	
Fecha de Promulgación	Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar, situada a orillas del Mar Caspio. Así, aun cuando hoy el nombre que suele emplearse para designar la Convención es “Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971)”, ha pasado a conocerse comúnmente como “la Convención de Ramsar”. Ramsar es el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, pero en comparación con los más recientes, sus disposiciones son relativamente sencillas y generales. Con los años la Conferencia de las Partes Contratantes ha desarrollado e interpretado los principios básicos del texto del tratado y ha conseguido que la labor de la Convención corra pareja con la evolución de las percepciones, prioridades y tendencias del pensamiento ambiental. El nombre oficial del tratado, Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves	

Acuáticas, refleja el énfasis puesto inicialmente en la conservación y el uso racional de los humedales sobre todo como hábitat de tales aves.

Sin embargo, con los años la Convención ha ampliado su alcance de aplicación hasta abarcar la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus aspectos, reconociendo que los humedales en tanto que ecosistemas son extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, cubriendo así el alcance completo del texto de la Convención. Por este motivo el empleo cada vez más frecuente de la versión corta del título del tratado, la “Convención sobre los Humedales”, es enteramente apropiado. (Para modificar el nombre del tratado sería preciso enmendar el propio tratado, lo que supone un complicado proceso que, de momento, las Partes Contratantes no toman en consideración.)

La Convención entró en vigor en 1975 y hoy (enero de 2013) cuenta con 163 Partes Contratantes, o Estados miembros, de todo el mundo. Si bien el mensaje central de Ramsar es la necesidad de usar todos los humedales de forma sostenible, la “estrella” de la Convención es la Lista de Humedales de Importancia Internacional (la “Lista de Ramsar”) – hasta ahora las Partes han designado más de 2.060 humedales con una superficie de 197 millones de hectáreas (1,97 millones de kilómetros cuadrados), equivalentes a una superficie superior a la de Alemania, Francia, España, Italia y Suiza juntas, para inclusión en la lista y protección especial como “Sitios Ramsar”. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la Depositaria¹ de la Convención, pero la Convención de Ramsar no forma parte del sistema de convenios y acuerdos sobre medio ambiente de las Naciones Unidas y la UNESCO.

La Convención depende únicamente de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP) y su administración corriente ha sido confiada a una secretaría, bajo la autoridad de un Comité Permanente elegido por la COP. La Secretaría de Ramsar está alojada, en virtud de un contrato, en la sede de la UICN–Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Gland (Suiza). La misión de la Convención de Ramsar, adoptada por las Partes en 1999 y revisada en 2002 es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

Análisis del Contenido	
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. En enero de 2013 el total de naciones adheridas a la Convención como Partes Contratantes era de 163, y había más de 2.060 humedales de todo el mundo, con una superficie mayor de 197 millones de hectáreas, designados para su inclusión en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar.	
Análisis crítico	Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Dan sustento a altas concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Los humedales son también importantes depósitos de material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, una especie común de los humedales, es el principal alimento de más de la mitad de la humanidad.

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO		
Objeto Tratado	Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano		
Fecha de Promulgación	16 de junio de 1972	Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p>PROCLAMA QUE 1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo</p>		

	<p>económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. 3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por él creado. Especialmente en aquel en que vive y trabaja. 4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio ambiente. Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en desarrollo. En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. 5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio ambiente, y se deben adoptar las normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo transforman continuamente el medio ambiente humano. Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para mejorar el medio ambiente se acrece a cada día que pasa. 6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio ambiente terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro</p>
--	---

	<p>bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio ambiente más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo, trabajo afanoso, pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor. La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas. 7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas de gran escala sobre el medio ambiente, también se requiere la cooperación internacional con objeto de allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio ambiente que, por ser de alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción de medidas para las organizaciones internacionales en interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en beneficio del hombre y de su posteridad.</p>
Análisis del Contenido	
Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que completamente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.	
Análisis crítico	Los problemas que se pretenden controlar a través de la presente normativa, en las regiones en que exista el riesgo de que la tasa de

	crecimiento o concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio ambiente o desarrollo, o en que la baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio ambiente humano y obstaculizar el desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas que respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos interesados.
--	--

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO		
Objeto Tratado	La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Habiéndose reunido en Río de Janeiro		
Fecha de Promulgación	3 al 14 de junio de 1992	Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p>PRINCIPIO 1 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.</p> <p>PRINCIPIO 2 De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional.</p> <p>PRINCIPIO 3 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.</p> <p>PRINCIPIO 4 A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deber constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.</p>		

	<p>PRINCIPIO 5 Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.</p> <p>PRINCIPIO 6 Se deber dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.</p> <p>PRINCIPIO 7 Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.</p> <p>PRINCIPIO 8 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.</p> <p>PRINCIPIO 9 Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.</p> <p>PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deber tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las</p>
--	---

	<p>actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deber proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.</p>
Análisis del Contenido	
<p>Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 , y tratando de basarse en ella, Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, los países contratantes del presente convenio internacional han determinado su apoyo y aplicación en mayor o menor medida interna de cada país, con el fin de lograr un mejoramiento de las situaciones particulares de cada región en problemas de cambio climático abrupto.</p>	
Análisis crítico	<p>Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. Por ello, problemáticas como la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los habitantes de cada uno de los Estados suscribientes deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.</p>

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL		
Título	PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO	
Objeto Tratado	Promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contaminantes en el mundo.	
Fecha de Promulgación	Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de	<p>Artículo 3</p> <p>1. Las Partes incluidas en el anexo I se aseguraron, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropologías agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto</p>	

la investigación	<p>invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012.</p> <p>2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo.</p> <p>3. Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado en cada periodo de compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los compromisos de cada Parte incluida en el anexo I dimanantes del presente artículo.</p> <p>Se informa de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que guarden relación con esas actividades de una manera transparente y verificable y se las examinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8.</p>
Análisis del Contenido	
<p>El Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático. De esta manera se establecen unos límites cuantificados y obligatorios de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para los países que lo ratifican, y que son jurídicamente vinculantes para éstos.</p>	
Análisis crítico	<p>La puesta en marcha de Kioto ha permitido una reducción del 22,6% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en 37 países industrializados y la UE, cuando el compromiso inicial era de una disminución del 5%. Lo cual resulta importante, máxime indica que los países suscriptores están en la línea de adopción de medidas contra el cambio climático.</p>

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título	LEY 807 DE 2003		
Objeto Tratado	Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada.		
Fecha de Promulgación	28 de mayo de 2003	Diario Oficial	No. 45.201
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación	<p>ENMIENDA</p> <p>Conforme al artículo XVII de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington, D. C., le 3 de mars de 1973 se convocó a una reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes en Gaborone (Botswana) el 30 de abril de 1983. Las siguientes Partes estuvieron representadas: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Botswana, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kenya, Liberia, Madagascar, Malaví, Malasia, Mozambique, Nepal, Noruega, Pakistán, Papua Nueva Guínea, Paraguay; Perú, Portugal, República Federal de Alemania, República Unida del Camerún, Rwanda, St. Lucía, Senegal, Sudán, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, Uruguay, Venezuela y Zambia. Con la mayoría de los dos tercios de las Partes presentes y votantes, la Conferencia de las Partes adoptó una enmienda al artículo XXI de la Convención añadiendo los 5 siguientes párrafos después de las palabras Gobierno Depositario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier organización de integración económica regional constituida por Estados Soberanos con competencia para negociar, concluir y hacer aplicar acuerdos internacionales relativos a cuestiones que les hayan sido remitidas por sus Estados Miembros y que están cubiertas por la Presente Convención. 2. En sus instrumentos de adhesión dichas organizaciones declararán su grado de competencia en los asuntos cubiertos por la Convención. Estas organizaciones informarán asimismo al Gobierno Depositario de cualquier modificación sustancial en su grado de competencia. Las 		

	<p>notificaciones enviadas por las organizaciones que tengan por objetivo una integración económica regional en relación con su competencia en los asuntos cubiertos por esta Convención y las modificaciones a dicha competencia serán distribuidas a las Partes por el Gobierno Depositario.</p> <p>3. En los asuntos de su competencia, esas organizaciones ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que la Convención atribuye a sus Estados Miembros, que son Partes de la Convención. En esos casos, los Estados Miembros de esas organizaciones no podrán ejercer tales derechos individualmente.</p> <p>4. En los ámbitos de su competencia, las organizaciones que tengan por objetivo una integración económica regional ejercerán sus derechos de voto con un número de votos igual al número de sus Estados Miembros que son Partes de la Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto en el caso de que sus Estados Miembros ejerzan el suyo, y viceversa.</p> <p>5. Cualquier referencia a una Parte en el sentido del artículo I h) de la presente Convención, ha Estado/Estados o a Estado Parte/Estados Partes de la Convención será interpretada como incluyendo una referencia a cualquier organización de integración económica regional con competencia para negociar, concluir y hacer aplicar acuerdos internacionales en los asuntos cubiertos por la presente Convención.</p>
Análisis del Contenido	
<p>Conforme al artículo XVII de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington, D. C., el 3 de marzo de 1973, se convocó a una reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes en Bonn (República Federal de Alemania), el 22 de junio de 1979. Como muestra fiel de la necesidad de implementar mayores herramientas y organismos que vigilen tal afectación mundial sobre las pérdidas de especies animales o vegetales en el mundo.</p>	
Análisis crítico	<p>Visto el texto de las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington, D. C., el 3 de marzo de 1973, adoptadas en Bonn, Alemania, el 22 de junio de 1979 y en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de 1983, los países contratantes del presente convenio indicaron que la necesidad de protección de fauna y flora debe actualizarse e ir aumentando, integrando los sistema tecnológicos para su mayor y mejor difusión.</p>

Análisis Inferencial

Mediante los métodos enunciados anteriormente como medios para la recolección de la información útil de esta investigación, se plasmaron los siguientes: (i) ficha de análisis normativo, (ii) ficha de análisis de tratados internacionales y (iii) entrevistas aplicadas a tres personas, que tienen manejo y conocimiento de dicha temática. Se puede evidenciar las distintas posturas en cuanto al efecto socio- jurídico entre la implementación, y recolección del impuesto a la bolsa plástica en Colombia, derivado del fin primordial para la cual nació a la vida jurídico en el ordenamiento jurídico, dejando dilucidar la reforma tributaria de 2016, como garante en la protección del medio ambiente, dando desarrollo vía decreto ante lo plasmado en artículo 79 de la Norma Superior.

En primer aspecto, se analizó el contenido del sistema normativo interno, en donde a manera utópica existen contenidos de distintos rangos normativos que señalan incluso a manera de derechos el goce y disfrute de un ambiente sano, siendo dirigido por distintas políticas públicas relacionadas con fines pecuniarios, ambientalistas y sociales en la protección del medio ambiente delimitado por rango territorial y/o fronterizo de cada Nación. Por tal motivo, en contenido tipificado Colombia intenta dar cumplimiento a las políticas supranacionales de carácter progresivo en el cuidado del planeta tierra, es decir, los gobiernos de turno mediante el congreso de la república, vienen realizando distintas normas con matiz de protección a los distintos ecosistemas, fauna y flora del país, esto mediante la imposición de impuestos, tasas, tarifas, y/o contribuciones a los distintos empresarios que se lucran de la explotación de recursos naturales, cuya explotación puede ocasionar detrimento de los recursos naturales no renovables, es así, como se pretende concientizar tanto a el empresario como al ciudadano del común en el cuidado del medio que habita o lo rodea.

En segundo aspecto, se analizaron los tratados internacionales más importantes en la protección del medio ambiente, siendo aplicados por países vecinos y de Europa, marcando como transversal mundial la grave problemática existentes en los distintos fenómenos ambientales (climáticos), que se vienen presentando, sin distinción alguna de frontera, soberanía o división territorial. Por esto, se procura en crear indistintamente normatividad que sea de rango vinculante en la protección de los recursos naturales que son vitales en la existencia del ser humano, y preeminentemente de la conservación del planeta tierra. Acorde a lo anterior, si la conservación del medio ambiente es problemática mundial, Colombia procura lentamente en la formulación de políticas públicas no muy productivas en algunos aspectos, pero con soluciones maleables a corto plazo con el deber internacional.

Obsérvese, la importancia de realizar las entrevistas como tercer aspecto de análisis las diferentes posturas desde el punto de vista académico y personal ante la sociedad en la aceptación de la imposición pecuniaria del impuesto a las bolsas plásticas, en donde a grandes rasgos las personas no se reusan al pago del impuesto, puesto que se trata de una medida para

evitar la contaminación del medio ambiente, pero, a diferencia critican de qué se hace el dinero del recaudo, debido a las tan altas tachas de corrupción enmarcadas a quienes son los encargados de administrar los recursos del Estado, es por esto, que la ciudadanía solicita la implementación de medias académicas en la formación de cultura de reciclaje, antes de, la imposición de una medida económica, manifestando abiertamente que quienes se ven más beneficiados son aquellos almacenes que no sufragan el costo de dicho impuesto. De tal manera que el conglomerado social tiene aceptación por políticas de prevención, cuidado y protección del medio en que vive, para lo cual debería ser aprovechado por los gobernantes de turno, evitando políticas clientelistas que no cumplen con sus objetivos primordiales para las que fueron creadas.

Respecto de las normas, tratados internacionales y entrevistas analizadas, no hay que desconocer que en el papel existe gran cantidad de protección para el medio ambiente, de igual forma limitaciones a quienes explotan los recursos naturales, pero, a diferencia en la realidad objetiva no se está cumpliendo con dichos parámetros, resultando conglomerado normativo para enmarcar. La sociedad exige que se de cumplimiento a las políticas que se formulan y conforme a los objetivos que se crean, no seguir en el libre albedrío de quienes ejercen las funciones administrativas, es así como resulta necesario para esta investigación enunciar la necesidad de educación ambiental en la sociedad a diferencia de la imposición de tributos mal encaminados en su distribución finalista.

LA UTILIDAD REAL DEL IMPUESTO VERDE AL USO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA.

Importancia de la imposición del impuesto a las bolsas plásticas en el sistema normativo

El sistema normativo colombiano se enmarca primordialmente por la Constitución Política, en la cual en los artículos 79 y 80, garantiza el goce y disfrute a sus ciudadanos de un ambiente sano, de tal manera, se hace necesario cumplir con leyes que dan desarrollo a este enunciado jurídico, es así como el Congreso de la Republica mediante la expedición de la ley 1819 de 2016 trajo consigo los siguientes artículos del Estatuto Tributario 512-15 y 512-16 la imposición de los impuestos verdes, clasificados entre ellos el de las bolsas plásticas, entrando en vigencia a partir de 01 de enero de 2017, marcando cuya medida principal de desuso de las bolsas plásticas en los centros comerciales, es decir, en las cajas y/o puntos de pago, para así desestimar su uso, lo cual conlleve a que los consumidores opten por otras medidas para llevar sus artículos de compra. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo emite un manual para el conglomerado social que sirve como mecanismo didáctico en el objeto y fin de la política reglamentaria existente en el ordenamiento jurídico.

Por consiguiente, resulta vital realizar una descripción del contenido de la ley 1819 de 2016, reforma tributaria en la cual señala:

- ✓ Recaudo al impuesto nacional de las bolsas plásticas.
- ✓ Siendo el objeto producto del cobro todas las bolsas pasticas sin importar distinción alguna, utilizadas para cargar, llevar los productos comercializados.
- ✓ Tarifas plasmadas: 2017= \$20, 2018=3\$0, 2019=\$40, 2020=\$50.
- ✓ Sujeto Pasivo, persona quien decide pagar por la bolsa plástica en establecimientos de comercio con la finalidad de cargar o llevar artículos enajenados en el mismo.
- ✓ Sujeto Activo, Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales de Colombia, como ente representativo del Estado.

Denótese, que con base en esta regulación no se incluye a manera general todo tipo de bolsa plástica, refiriéndose a la de los productos pre-empacados, las que indistintamente así sean de plástico se puedan reutilizar, o en su defecto aquellas que no necesiten de un proceso químico para su uso nuevamente, es así como el gobierno con la ayuda del Ministerio en relación procura disminuir la utilización de dichas bolsas en el cotidiano transcurrir de sus asociados.

Entonces, el uso desbordado de las bolsas plásticas a nivel mundial viene ocasionado graves daños al medio ambiente, generando contaminación y efectos invernaderos tóxicos en todas las etapas de elaboración y eliminación no controlada por parte de las personas, de tal manera, es como los distintos gobiernos de turno junto con ambientalistas se procura por generar políticas publicas encaminadas al desuso de este tipo de bolsa radicado en su materia prima de composición. Conllevando a traer consigo el siguiente análisis realizado por Bernal Vargas, L.F. (2017), en donde en el siguiente cuadro explica con profundidad los efectos nocivos ocasionados en el mal uso de este material plástico:

Afectación Negativa del Plástico

Tabla N° 8. Efectos Negativos Causados por el Consumo Desmesurado de Bolsas Plásticas.

EN COLOMBIA	EN EL MUNDO
<ul style="list-style-type: none"> - Afectación sobre elementos de la estructura ecológica principal que lleva a un deterioro de ecosistemas estratégicos, entre ellos el pluvial y el marino. - Polución visual en suelo, fuentes hídricas, espacios habitables de recreación y esparcimiento. - Afectación de especies animales amenazadas por interferencia en las cadenas alimentarias. - Afectación a fuentes hídricas por degradación significativa de la calidad de este recurso. - Afectación de sistemas críticos de servicios públicos por taponamiento de redes de alcantarillado, entre otros. - Disminución importante de la capacidad de los rellenos sanitarios. - Generación de gases de Gases de Efecto Invernadero durante su fabricación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Más de un trillón de bolsas plásticas se usan en el mundo cada año, lo que implica un gasto de aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo globalmente para fabricar bolsas. - Según datos de la Fundación Seaturtles, cerca del 10% del total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. El 70% de los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde nunca serán degradados, así mismo, cada 2,59 kilómetros cuadrados de océano tienen unas 46.000 piezas de plástico flotando. - Existen zonas marinas que tienen 3 kilogramos de plástico por cada 0,5 kg de plancton, y más de 100.000 animales marinos y más de un millón de aves mueren debido a los residuos plásticos que están dispersos en el medioambiente. Las tortugas principalmente, mueren junto a otros animales marinos al engullir las bolsas debido a su parecido a las medusas, alimento de las mismas.

Fuente: Elaboración Propia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017).

La autora relaciona la afectación de contaminación del suelo, fuentes hídricas, zonas verdes y demás a nivel nacional y supra nacional, dejando ver la grave problemática que se está ocasionando a cada Estado o Nación, por esta razón es que se han dado las iniciativas en generar regulación normativa con carácter de imposición pecuniaria, con la finalidad de tocar los bolsillos de las personas y de la misma manera generar conciencia en la productividad ambiental de la cultura de reciclaje.

Después de esto, es notorio el cumplimiento en el papel y en el sistema normativo, pero, a pesar de tanto regulación, se evidencias distintos fenómenos jurídicos y pecuniarios

tanto positivos como negativos en la sociedad y en el andamiaje del Estado. Los cuales se explican a renglón seguido.

Impacto socio-jurídico del impuesto a las bolsas plásticas

Inicialmente para hablar de impacto social, esta investigación se remite a las diferentes noticias enunciadas por los distintos medios de comunicación en el país, debido a que anteriormente ya se expuso y analizó la normatividad, la cual pretende dos fines; (i) disminuir el uso de las bolsas plásticas; y (ii) proteger el medio ambiente, para lo cual, la sociedad colombiana en el transcurrir desde el 2017, fecha en vigencia del impuesto en mención se viene dilucidando minoría lentamente en el uso de este tipo de bolsas como se afirma por Morales Manchego, M. (2018), en el siguiente diario de información pública:

“Por impuesto a bolsas plásticas, su uso se redujo en 30 por ciento”

“Desde el 1.º de julio del 2017, cuando empezó a regir el impuesto al consumo por uso de bolsas plásticas para llevar los productos adquiridos en los establecimientos comerciales, hasta el 9 de febrero pasado, los colombianos usaron 688’628.867 de estos empaques, por los cuales pagaron tributos que sumaron 10.404 millones de pesos, según reporte de la Dian”.

“De estas cifras se desprende que los ciudadanos demandaron 3’568.025 bolsas diarias. Si el ritmo de consumo se aplicara a los 365 días del año implicaría que en el país se usaron 1.302 millones de bolsas plásticas, cifra que dista mucho de las 14.000 millones que, se calcula, se usaban antes de su cobro”.

De igual manera, la revista semana, (2018) hizo una publicación referente con el aspecto positivo de la sociedad en el desuso de las bolsas, resaltando lo siguiente:

El impuesto funcionó: 71 % de hogares bajó el consumo de bolsas plásticas

La política para racionalizar su consumo de empaques comenzó a dar buenos resultados según el Departamento Nacional de Planeación: se recaudaron 10.460 millones de pesos y ya en el 52 por ciento de los hogares separan las basuras.

Pese a la fuerte oposición que tuvo entre muchos colombianos la adopción de un impuesto al consumo de bolsas plásticas, los resultados de esta política muestran resultados positivos en términos económicos y ambientales. Así lo confirma la encuesta de percepción ciudadana del Departamento Nacional de Planeación, que asegura que desde la vigencia de este impuesto y hasta la fecha, el 71 por ciento de los hogares colombianos redujo el consumo de bolsas plásticas.

En materia económica, el impuesto le generó al país un recaudo tributario de 10.460 millones de pesos entre julio y diciembre del año pasado, lo que implica que los colombianos consumieron 525 millones de estos empaques. De acuerdo con Fenalco y Acoplásticos, la producción y distribución de bolsas cayó 30 por ciento en el mismo período.

Por consiguiente, después de citar estas noticias es un hecho notorio que los hogares familias en Colombia progresivamente han tomado conciencia en minorar el uso excesivo de las bolsas plásticas, indistintamente sea por una afectación monetaria causada al bolsillo o en su defecto por la gran afectación ambiental que cusa la materia prima de la cual están compuestas las bolsas al medio ambiente y sus ecosistemas.

A pesar de, ver aspectos positivos en la sociedad no se debe tomar como una meta alcanzada a finalidad, puesto que, la contaminación y el daño que se ocasiona al medio ambiente en la actualidad es muy grave, derivado de indefinidos actos cotidianos del ser humano, por lo tanto, el dinero recaudado por la imposición de este impuesto tiene como fin primordial la restauración de ecosistemas, parques naturales y demás organizaciones encargadas por el Estado en tal protección y/o cuidado.

Por lo tanto, el acontecimiento fáctico social se relaciona con los efectos jurídicos ocasionados dentro del Estado Social de Derecho, puesto que, el recaudo del dinero plasmado en la reforma tributaria de 2016, esta netamente dirigido a las entidades encaminadas a desarrollar y promover aquellos proyectos garantizadores de la protección, restauración y cuidado del medio ambiente, tanto así, es preciso explicar el enfoque dogmático y positivo de los impuestos verdes.

Enfoque dogmático y positivo de los impuestos verdes

El Derecho Fiscal, tributario y de las finanzas públicas de manera particular encuentran dos elementos que nos permiten desarrollar los extremos de la tributación, de esta forma los especialistas del tema lo han clasificado como los enfoques dogmáticos y positivos, en esta definición es dable concluir que el primero se encuentra ligado al dogma que representan los impuestos y el segundo se identifica como la realidad del sistema tributario.

En el escenario del dogma, la idea consiste en que el ideario del sistema tributario es que yo como aportante a las cargas del Estado veo reflejado mi esfuerzo de manera individual y real, para el caso en concreto, de acuerdo a mi esfuerzo tributario, veo de manera directa la materialización del mismo y puedo palpar el retorno de forma real.

Por el contrario, el enfoque positivo, se da en la realidad del sistema tributario propiamente dicho, el que se evidencia de forma palpable o tangible en el diario vivir, es decir, el bajo recaudo, alta evasión y elusión y poco retorno por cada esfuerzo, de los valores cancelados por los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias.

Dentro del derecho tributario y en especial en los tributos verdes, se percibe tal enfoque real o positivo, máxime el recudo de los impuestos como el de las bolsas plásticas, presentan desde la misma normatividad, una serie de vacíos, que como por enunciar alguno, no se delimita al órgano, ente o director que se encargara de velar por su efectivo recaudo o aún más, su efectiva reinversión en la sociedad, no siendo otra que la de disminuir el uso de la bolsa plásticas.

Hecho que no se evidencia en múltiples formas, puesto que el ideario o dogmática del derecho, expone que su regulación mejoraría la convivencia social y en el presente caso, el cuidado climático (medio ambiente) a través de la reutilización de bolsas plásticas o sus derivados.

El análisis de forma puntual debe permitir que en algunos casos se conjugan aspectos de cada elemento que deben ser identificados por el contribuyente, quien de forma individual debe hacer su ejercicio de análisis y tomar de cada uno lo que realmente le permite sentir e identificarse con cada uno de ellos.

Siendo idóneo indicar que depende más del estilo de vida o enseñanza cultural de la persona o sujeto pasivo del tributo verde, puesto que, si la misma no aprecia el valor de cancelar dicho impuesto, debido a que en la sociedad observa que no se ve reinvertida su contribución, debido a problemas como la corrupción y otros, tal enfoque resulta ser positivo o real y no genera el objeto que inicialmente la política pública de protección ambiental que el impuesto verde pretendía generar.

De este modo, se verifica lo anterior expuesto en que los dirigentes colombianos o gobierno de turno no está dando cumplimiento a lo establecido en la reforma tributaria de 2016, cuya exposición de motivos enmarcaba que el recaudo sería para la protección del medio ambiente o en su caso proyectos de mitigación a los daños adversos ocasionados por la titularidad de cada impuesto verde, de esta manera el diario el espectador en fecha de 09 de enero de 2019 publicó la siguiente noticia:

Contraloría cuestiona uso del recaudo de bolsas plásticas e impuestos al carbono

Según el máximo ente de control fiscal, el grueso de estos recursos no se está invirtiendo en el cuidado del medio ambiente sino en la financiación de los acuerdos de paz.

Con la aclaración de que para la Contraloría General de la República es importante el cumplimiento de los acuerdos de paz, dicha entidad comunicó este miércoles su preocupación sobre el uso que se le está brindando al dinero recaudado proveniente de los impuestos a las bolsas plásticas y el carbono. Según el máximo ente de control fiscal, el grueso de estos recursos se está destinando a financiar el posconflicto y no el cuidado del medio ambiente, como se supone.

La información manejada por la Contraloría, entregada a la misma por la DIAN, da cuenta de que para noviembre de 2018 el recaudo proveniente del impuesto al carbono representó \$294.000 millones, de los cuales, el 70% fueron destinados para la implementación de los acuerdos pactados entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, mientras que el 30% fue utilizado para temas medioambientales.

En detalle, mientras el posconflicto recibió \$205.800 millones, provenientes de este tributo ambiental, los asuntos ecológicos solo \$88.200 millones. Solo 30% de lo recaudado con el impuesto al carbono iría al cuidado del medio ambiente.

De igual forma, se estima que el recaudo proveniente del impuesto a las bolsas plásticas, a junio de 2018, ascendió a \$14.510 millones. Para este caso, según lo comunicado por la Contraloría, estos ingresos no tienen una destinación en específico, sino que van a la bolsa común del tesoro nacional.

Ante tal panorama, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional para que estudien la posibilidad de asegurar que los recursos e impuestos ambientales sean direccionados al sector medio ambiental. Lo anterior, explicando que este campo necesita de inversiones significativas que permitan la corrección de acciones negativas causadas por la emisión de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles.

Concluyendo de esta manera, en la preeminente aplicabilidad del enfoque positivo o real en el destino y finalidad que el gobierno le está dando a los recursos obtenidos de los impuestos verdes, es un hecho notorio que el post- conflicto tiene altos costos, pero no resulta equitativo invertir solo un 30% del total recaudado en la protección del medio ambiente, puesto esta era la finalidad, objeto plasmado en un inicio cuando se trajo consigo este nuevo arancel a el grueso de la sociedad colombiana, tanto así que se diversifica los contenidos plasmados en la ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el ministerio de ambiente, precursor de todas las políticas y demás proyectos en la restauración de recursos naturales vitales del planeta tierra y del ser humano.

Beneficios del impuesto verde a las bolsas plásticas en Colombia

Debido a la gran problemática de contaminación emitida por los gases del efecto invernadero en el medio ambiente, de los combustibles fósiles entre ellos: carbón, petróleo y gas natural, vienen progresivamente aumentando el calentamiento global, este último afectando a nivel mundial con fenómenos naturales inesperados para el ser humano, es allí, donde se procura dar un cambio con la implementación del impuesto a la bolsa plástica en Colombia, cuyo tributo encaminado a combatir los efectos negativos que se generan en su manufactura.

Resaltando el objetivo principal en el fin de los impuestos verdes es direccionar a las empresas y personas en buscar mecanismos alternos en su diario vivir, en los cuales no se presente uso desmesurado de productos que contaminen en gran cantidad el medio que los rodea, es decir, imponer un arancel de carácter económico afecta el dinero de cada familia o empresa, lo que conlleva a mirar otras formas de convivir en donde no se afecte directa o indirectamente prioridades ya sean estas económicas, sociales o jurídicas.

Por lo tanto, a grandes rasgos mediante esta política tributaria se pretende fomentar la cultura de reciclaje en los hogares y sociedad colombiana, desde el ciudadano del común hasta el empresario, en donde se direcciona una manera de pensar progresiva y de cuidado antes los recursos naturales que poco a poco se están agotando y son vitales en la subsistencia del ser humano, de tal manera resulta procedente mirar la conceptualización de términos como: reciclaje y material biodegradable.

El reciclaje

A grandes rasgos se entiende como tomar productos ya utilizados, para reutilizarlos nuevamente, pero solo este es un aspecto inicial de este término, según Boada Ortiz, (2003) enuncia: “Es aquí donde el reciclaje buscaría recuperar materiales ya usados para reutilizarlos en la fabricación de nuevos productos y así de alguna forma reducir la demanda de recursos al planeta. Estas iniciativas ambientales con base en una herramienta como lo es el reciclaje tienen una base conceptual fuerte: el planeta tiene recursos limitados y no hay que desperdiciarlos. Pero este mismo concepto ha sucumbido a la popularidad de la herramienta misma. Es decir, el reciclaje se ha convertido en una cruzada ambiental, que si bien procura detener el derroche de recursos naturales, puede llevar a una crisis ambiental peor a la que indujo a su uso. Suena raro, como coloquialmente decimos, decir que el reciclaje pueda ser negativo, pero como siempre ocurre, el activismo se vuelve más importante que la intención. En Colombia se habla incluso de la “cultura del reciclaje”.

Denótese, la importancia del autor en establecer criterios como recursos no renovables, reutilización, crisis ambiental, y cultura de reciclaje, todos estos reunidos en la política tributaria de impuestos verdes, señalados por el gobierno en fomentar dicha actividad, pero dejando un gran vacío el cual se vislumbra en la falta de conocimiento de la gran mayoría de personas en Colombia, conllevando a plantear en esta investigación le idea de primero educar a la sociedad en el término reciclaje para así fomentar su cultura y beneficios tanto individuales como colectivos en la sociedad. En suma, el concepto antes expuesto conlleva a definir el termino biodegradable, y de cuales recursos no se pueden renovar.

La biodegradable

Según Pérez Porto y Merino, (2018), el adjetivo biodegradable permite calificar a la sustancia que se puede degradar mediante el accionar de un agente biológico. Los animales, los hongos y las bacterias, por ejemplo, pueden lograr la descomposición de este tipo de productos. Aquello que es biodegradable, por lo tanto, se degrada en condiciones ambientales de tipo natural por intermedio de un organismo biológico. La degradación supone que la sustancia en cuestión se descompone en los diferentes elementos químicos que la formaban.

Las sustancias biodegradables suelen ser usadas por microorganismos a modo de sustrato, generando energía con ellas por la respiración celular. Además, les permiten producir tejidos, aminoácidos o hasta otros organismos.

Entonces, se logra entender que las bolsas plásticas que no están hechos de materia primas naturales no logran esta etapa a través de agentes externos como el sol, químicos o el agua, de tal manera, que, si la sociedad colombiana se capacitara en estos conceptos antes de implementar un impuesto, los avances en cuidado del medio ambiente se verían reflejados en estadísticas más altas.

Por tal motivo resulta conducente y pertinente entrar a relacionar, si verdaderamente la reglamentación contenida en la reforma tributaria de 2016, ha sido útil para la conservación o mitigación de aspectos negativos contaminantes al medio ambiente y ecosistemas componentes de este, debido a la gran variedad climática existente en el país, así mismo la clasificación social, económica y cultural de la población existente.

Utilidad de los impuestos verdes en Colombia

La estructura social de los colombianos, ha demostrado que solo mediante eventos de gran impacto y si es de carácter educativo mucho mejor; se puede aprender a mejorar, tales como las victorias de los deportistas, o eventos culturales que llegan o calan en la mente del colombiano promedio, este aliciente, no ha sido comprendido por el legislador desde sus inicios, puesto que la expedición hiperinflacionaria de normas jurídicas, así lo presumen y el caso de los impuestos o reformas tributarias, no es la diferencia.

Allí, el tema impositivo y tributario no se ha estudiado desde el punto de vista cultural, puesto que los referentes culturales del facilismo “ilustrado” que se expone en los medio de comunicación, deja mucho que desear de una sociedad que difícilmente puede cuidar o educar a sus niños y jóvenes; siendo aún más complejo implantar el chip de preocupación por el cambio climático, pues la ignorancia y la falta de educación en múltiples sectores de la sociedad, son el caldo de cultivo para la corrupción, que impide motivar a los políticos a crear policías públicas que permitan el cuidado del cambio climático, cambio que está avanzando a un paso que no queremos reconocer como agigantado.

En tal sentido, existen dos elementales pero complejas posiciones al respecto, que resultan apenas obvias; la primera de ellas, responde el interrogante con un *sí*, la otra con un *no*, la primera de ellas, indica que existe un pequeño porcentaje de reducción en el consumo o empleo de bolsas plásticas, que en el coloquio público y social se entiende generado por la incómoda pregunta que pocos responden ipso facto, dicha pregunta es ¿desea cancelar el precio adicional de la bolsa plástica? Y más que por pena de la redundante mirada de los demás compradores o usuarios, por el eco de seguir una corriente que poco aprecian o entienden, corriente que es la de cuidar el medio ambiente.

En idéntico sentido, indican que no compran las bolsas plásticas, por evitar un costo adicional, que para algunos resulta irrisorio, y para otros puede sumar en un momento determinado de su economía. Lo cierto es que el efecto de disminuir la utilización de bolsas plásticas, no está llegando al tope o punto expectante que las “buenas” intenciones políticas predijeron a través del contenido normativo de la reforma tributaria del año 2016.

Así mismo, se pudiese enunciar que, si existe la reducción, como algunos porcentajes y encuestan lo indican, pero no se plasmó un plan de acción que respondiera a dichos interrogantes o subsanación por el no cumplimiento de la expectativa de reducir el uso de las bolsas plásticas.

Hecho que no ha sido contemplado por el gobierno nacional, ni por el insipiente Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, quien, en la Ley de Financiamiento, no se pronunció sobre este tipo de impuestos, lo cual sigue reflejando la falta de voluntad política en Colombia.

Visto ello, se estructura la otra respuesta que tiene más puntos que indicar, más allá de ser favorables o no, lo cierto es que afectan el sistema cultural del reciclaje y efectividad de las medidas del cambio climático.

Para empezar, en el año 2017, el conglomerado político del gobierno nacional de turno, incluyo en la depreciada y abucheada reforma tributaria un concepto nuevo en Colombia, y ya desarrollado en pactos, tratados y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente en el mundo, concepto que no se desarrolló en profundidad, ni siquiera en los aspectos básicos del derecho tributario y las finanzas públicas.

Aspectos como el enfoque o efectividad de los diferentes tributos con los que de forma constante se grava al pueblo colombiano. Lo que en realidad genera más desconfianza en la clase política, porque no resulta extraño entrever las crudas intensiones de un político, que suele estar viciado por los impulsos económicos del sector empresarial, tal es el caso del sector de los plásticos, que debe reinventarse o sufrir la desaceleración económica que implica el dejar progresivamente de usar bolsas plastias y materiales similares en los cientos de productos del comercio nacional e internacional.

Allí toma importante curiosidad, el saber porque no ha generado los resultados esperados, y más que ello, las razones del porqué, razones que, bajo la poca presunción de inocencia en Colombia, suelen tener elementos de corrupción, que vician toda norma jurídica y no por la eficacia de la misma, sino por las intenciones ocultas que el legislador permitió integrar a la norma.

Intensiones del talante descuidado de prevenir las emisiones de dióxido de carbono que busca disminuir el uso de combustibles fósiles para así reducir las emisiones de gases efecto invernadero que tanto afectan el planeta, con repercusión en cada uno de los polos o puntos cardinales del mundo.

Las preocupaciones ambientales de sectores encargados del activismo social y ambiental, son las encargadas de generar ese pequeño eco en los legisladores, para que sean incluidos los impuestos verdes en el ordenamiento jurídico colombiano, preocupaciones consolidadas en el COP21 (XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, 2015), compromiso que adquirió el país y su legislación debe empezar a convergen a tales preocupaciones ambientales, con el fin de reducir las emisiones de dióxido en un veinte (20%) por ciento para el año 2030.

La reforma tributaria del año 2016, se refiere al impuesto de carbono como un gravamen que recae sobre el contenido de carbono o la cantidad de partículas que contienen los combustibles fósiles, sin excluir los derivados de petróleo que sean usados con fines energéticos; en idéntico razonar señala que el hecho generador de impuestos como al carbono es la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles, el cual se tiene su causación en la única etapa de contentiva del hecho generador que ocurra primero.

Regulación que a diferencia del impuesto a las bolsas plásticas, si está ampliamente desarrollado en la reforma tributaria del año 2016, siendo necesario que el país asuma una postura que permita hacerle frente al desafío global del cambio climático y se pretende que con un impuesto, con poca socialización y educación en la cultura del reciclaje, sea el que por sí solo logre realizar un recaudo importante, dejando múltiples inquietudes acerca del arancel, ya que los nombrados derivados del petróleo son combustibles de uso frecuente en diversas actividades económicas, lo cual afectaría el precio final de estos combustibles y por ende al consumidor final, ello nuevamente demuestra que el problema del impuesto verde, tiene también los problemas generales de todo impuesto en Colombia.

Manteniendo la inquietud principal y que poco se determinó en la reforma tributaria de 2016, y mucho menos en la ley de financiamiento del año 2018 con entrada en vigencia el presente año 2019. Y es como y a donde se invertirán los recursos recaudados.

En primera medida y como argumento adicional a los anteriores, para indicar que no ha sido fructífero imponer un impuesto verde como el de las bolsas plásticas en Colombia, es que el dinero recaudado por los impuestos debe ser destinado al sector ambiental, a planes

de adaptación al cambio climático, mediante la creación de empleos con personal especializado en dicho tema, (como el caso de los recicladores, mal llamados así, a quienes de forma puntual y breve se les puede enseñar e instruir más sobre el caso, aunque a decir verdad, no necesitan mayor enseñanza, sino apoyo, porque muestra de ello es la capacidad de hacer por necesidad lo que todos deberían practicar), proyectos de reforestación, incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el medio ambiente, en proyectos auto sostenibles, entre otros.

No resulta errado entender las razones del porque el ministerio encargado (ministerio de ambiente y ministerio de crédito publico), no están preocupados por definir de forma literal en una norma, a donde van realmente dichos recursos, o algún informe de rendición de cuentas de los montos recaudados y reinvertidos, que permita zanjar dicha duda.

Seria especular, a donde destinarían dichos recursos, pero como esa labor no es la que nos ocupa, lo puntual, indica que no existe aún certeza del sector o encargado de tan apetecido recaudo y capital económico.

La labor del Congreso inicialmente sería replantear mediante una nueva reforma o adición a la misma, la solución a las dudas preponderantes en la norma. Para que revise si los impuestos verdes que corren por cuenta del bolsillo de los contribuyentes son en realidad una medida efectiva de protección al medio ambiente.

A dichas dudas se suman las exenciones tributarias y económicas al sector empresarial, que se enunciaron en la Ley de financiamiento, pero no precisamente a las pymes o pequeños empresarios, sino al sector industrial posicionado en Colombia.

Exenciones, que, a la vista del pueblo contribuyente, son desmedidas, como por la carga excesiva que recaería sobre algunos para financiarlas, y algunos son el pueblo o clase media hacia abajo; por ello, valdría la pena que se profundizara sobre los impuestos que además de recaudar, corrigieran las falencias ambientales mediante los proyectos reales y generan impactos positivos sobre la sociedad.

Como, por ejemplo, reducir el valor del impuesto por recolección de aseos urbano en las ciudades a las familias y empresas que mensualmente aporten un promedio en ciertas medidas de peso estándar como los kilogramos, para que dichos valores que mes a mes cancelan las familias en sus hogares y las empresas también, se vean disminuidos y no con el simple garrote de gravar económicamente el uso desmedido de las bolsas plásticas.

Es allí, donde el gobierno debe centrar sus acciones o políticas públicas, en dotar a los encargados de reciclar en el diario vivir, de mostrarles que ese puede ser un camino idóneo para vivir y no simplemente sobrevivir.

Visto así, los agentes externos que constituyen efectos negativos en el medio ambiente, serian reducidos, pues la degradación “natural” de este tipo de plásticos superan más de cinco (05) generaciones de una misma familia, por dar una cifra temporo-espacial.

En consonancia, dichos efectos negativos asociados a la producción o consumo de ciertos bienes, que, al no ser asumidos por el productor o el consumidor, terminan siéndolo por la sociedad.

Este costo social puede, sin embargo, trasladarse al responsable, productor o consumidor, mediante el uso de impuestos verdes, en línea con el principio del que contamina paga, pero no dejándolo allí no más, sino también dando zanahoria a quien ha realizado su labor mes a mes.

Adicional a estos tributos, al incentivar la innovación y el uso eficiente de recursos, terminan generando mejoras en productividad y competitividad, que en principio se evidenciarían en las empresas; y mediante pedagogía climática y de uso responsable, acogería al sistema interno de los hogares en las familias colombianas, para dejar por sentado el inicio de un complejo sistema de prevención, recolección y efectiva redistribución de los materiales reciclables.

La participación de este tipo de impuestos calificados como “verdes” dejaría de tener una connotación simplemente símil, toda vez que, en la estructura tributaria de Colombia, apenas llega a medio punto porcentual o equivalente al 0,5 por ciento del PIB, distando de los países integrantes de la OCDE es de 2,2 %.

Y con la entrada o aceptación a tal organismo por parte de Colombia, los estándares a cumplir son los de los países primermundistas o europeos principalmente, estándares que muchos economistas, ambientalistas y abogados se preguntan, como serán alcanzados al ritmo y nivel de avance socioeconómico que se proyecta para los próximos años.

Así, se iteran los argumentos del por qué se considera con más fuerza el que no se haya alcanzado el efecto deseado con el impuesto verde a las bolsas plásticas, pues las falencias no subsanadas con la pasada ley de financiamiento, dejó pasar un tema en primera línea de la agenda internacional, al dejarlo en un socavón del Congreso, pues su olvido nos costará más con el paso del tiempo, sumado a la falta de pedagogía ambiental, pues no basta con publicar, dar me gusta o poner cara de preocupación con las noticas del cambio climático, sino se hace más que algo por mejorar la situación del único planeta tierra de esta vía láctea.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El cambio climático en el mundo, es un tema de preponderante notoriedad dentro de la agenda climática en el mundo, hecho que dista de la realidad política en Colombia, puesto que, en materia tributaria, los impuestos verdes, las normas jurídicas y entidades del Estado encargadas de regular tan importante tema, no presentan la cohesión mínima que el sistema de colaboración Estatal debería contemplar.

La aplicación de las finanzas públicas y el derecho tributario en Colombia, demuestran que los enfoques (dogmático y positivo), son dos elementos del derecho tributario que se aplican de forma desordenada, máxime la realidad siempre termina superando a la ficción, ello porque el recaudo de dicho impuesto y su retribución en la sociedad, no ha permitido contemplarlo como un tema eficiente o verdadero, por el contrario, mantiene los vacíos que afectan otro tipo de impuestos, ello es la elusión, evasión y bajo recaudo.

En el contexto social, no se percibe la real intensión social de disminuir el uso de las bolsas plásticas, más allá de un valor irrisorio que cada ciudadano cancela, puesto que ni llegando al tope máximo de cincuenta (50) pesos colombianos, los compradores, comerciantes y ciudadanos dejaran de usar tal producto de extrema contaminación y difícil degradación; la cual debe realizarse de forma industrial o a nivel empresarial con las recuperadoras o empresas tratantes del material reciclable en Colombia, empresas que deberían tener una exención tributaria superior a las demás empresas del sector comercial en Colombia.

En el contexto ambiental, la población cuando dilucida los efectos negativos y los fenómenos ambientales que se ocasionan por el mal uso de los recursos naturales, se motiva a cumplir con políticas de cuidado al medio ambiente, siendo este, el punto de partida para los dirigentes en implementar proyectos que sean aplicados directamente al resarcimiento de los ecosistemas afectados, es de esta manera, que las personas no se rinden en el transcurso y desarrollo de las metas trazadas, siempre y cuando el gobierno de cabal cumplimiento y no desestime la voluntad de quienes dedican tiempo a sus mandatos.

La implementación de los impuestos verdes, conlleva en realidad a un buen fin en la sociedad, y poco a poco ha tenido aceptación, lo cual deriva el grado de concientización del ser humano, así provenga de manera impositiva, se proyecta a mitigar los daños ocasionados al medio ambiente, resaltando que no se está promoviendo o exigiendo más tributos, sino por el contrario, readecuar los vigentes con mira internacional en el cuidado del planeta tierra.

La falta de unas políticas públicas frontales que disminuyan de forma eficaz el uso de materiales poco degradables como el plástico, hacen de la labor del reciclaje, una ardua tarea, máxime la cultura latinoamericana se ha permeado de las culturas americanas o de Estados Unidos, las cuales infunden el facilismo o consumismo comercial, desechando cada vez más una cantidad extrema de empaques, plásticos, o envases poco reciclables.

La imperiosa necesidad de crear un organismo cien por ciento ambiental en Colombia, que proyecte y lleve al Congreso este tipo de políticas públicas, emerge desde hace varias décadas, puesto que en Colombia el tema ambiental sigue estando relegado a los intereses particulares de las masas de la economía, que proyectan sus productos a un efectivo y rápido consumo, sin controlar las implicaciones climáticas e incluso en materia de salud en el ser humano; con tal de logran un monto alto de ventas o compras de consumidores que se tornan adictos o fanáticos del objeto.

Se debe procurar más por la formación académica de la población que va ser sujeto pasivo del pago del tributo, en referencia de políticas de cuidado ambiental, las cuales generen incentivos en quienes se acojan a sus disposiciones y posterior a esto, si realizar o imponer impuestos o sanciones a aquellos que se reúsen en su cumplimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Europea De Medio Ambiente, El tributo ambiental: aplicación y efectividad sobre el medio ambiente, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997, página 9.
- Avellaneda Bautista, C. A. (2007). La ciencia tributaria. Bogotá D.C., Colombia: Editorial Universidad Libre.
- Bedoya Niño, J. (2017). Tributación ambiental en Colombia. (Paper). Bogotá., D.C., Colombia: Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16090/Ni%F1oBedoyaJuliana2017.pdf?sequence=5>
- Bernal Vargas, L.F. (2017). Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas de utilización desechable en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad De Educación A Distancia-Faedis. Programa De Contaduría Pública. Obtenido de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16746/BernalVargasLuisaFernanda2017.pdf;jsessionid=4637448CB3D867FEAA100D24992E1B64?sequence=3>
- Boada Ortiz, A. (2003). El reciclaje, una herramienta no un concepto reflexiones hacia la sostenibilidad. Universidad Externado De Colombia. Centro de Gestión Ambiental. Obtenido de: <http://www.ingenieroambiental.com/4014/reciclaje5.pdf>
- Constitución Política de 1991. Bogotá D.C.
- Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.
- Credencial.com. (07 de noviembre de 2017). ¿Por fin les ganamos a las bolsas plásticas? Obtenido de: <http://www.revistacredencial.com/credencial/noticia/actualidad/por-fin-les-ganamos-las-bolsas-plasticas>
- Declaración De Bariloche. (septiembre 30 de 2007). Declaración del segundo congreso Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas. Diario Oficial N° 41.893.
- Declaración De Estocolmo Sobre El Medio Ambiente Humano. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano del 6 de junio de 1972.
- Declaración De Río Sobre El Medio Ambiente Y El Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.

Decreto 624. (30 de marzo de 1989). Congreso de la Republica. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Bogotá, D.C., Colombia: Diario Oficial No. 38.756 de 30 de marzo de 1989. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html

Díaz Palacios, A. A. (2017). Sentencias de unificación jurisprudencial y mecanismo de extensión: aplicación en materia tributaria. Bogotá, D.C., Colombia: Editorial Legis.

Economía y Semana.com. (04 de octubre de 2018). El impuesto funcionó: 71 por ciento de hogares bajó el consumo de bolsas plásticas. REVISTA SEMANA. Obtenido de: <https://www.semana.com/economia/articulo/bajo-el-consumo-de-bolsas-plasticas-en-71-por-ciento-de-hogares/563221>

Pérez Porto, J. y Merino, M. (2018). Definición de biodegradable. Obtenido de: <https://definicion.de/biodegradable/>

Robledo, J. E. (2016). *La peor reforma tributaria imaginable: Robledo*. Publicado en Impuestos, Reforma tributaria 2016. Boletín de prensa. Recuperado de: <https://jorgerobledo.com/la-peor-reforma-tributaria-imaginable-robledo/>

Ley 1819. (29 de diciembre de 2016). Congreso de la Republica. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., Colombia: Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html

Ley 99 de 1993. (diciembre 22). Congreso de la Republica. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Bogotá D. C. Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993. Obtenido de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html

Ley 1943 de 2018. (diciembre 21). Congreso de la Republica. "Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". Bogotá. D. C. Diario Oficial N° 59.831. Obtenido de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_12018.html

Ley 74 de 1979. (3 de junio de 1978). Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978 al 30 de abril de 1980. Diario Oficial No. 35.447. Obtenido de: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/>

- Ley 807 de 2003. Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada. 28 de mayo de 2003. Diario Oficial No. 45.201. Obtenido de: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/>
- Ley 464 de 1998. (26 de enero de 1994). Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales", hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 4 de agosto de 1998. Diario Oficial N° 43.360. Obtenido de: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales/resoluciones/>
- García Novoa, C. (2011). Iniciación, interrupción y computo del plazo de prescripción de los tributos. Madrid, España: Editorial Marcial Pons.
- García Nova, C., García Núñez, D., & García Frías, M. (2016). Lecciones de procedimiento tributario y aduanero: (España - Colombia). Cali, Colombia: Editorial Restrepo & Londoño.
- Getial, J. C. (2013). Manual básico de redacción para abogados. Cúcuta, Colombia: Editorial Universidad Libre.
- Morales Manchego, M. (15 de febrero de 2018). Por impuesto a bolsas plásticas, su uso se redujo en 30 por ciento. EL TIEMPO.COM. obtenido de: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/impuesto-a-las-bolsas-plasticas-hizo-que-su-uso-se-redujera-182910>
- Restrepo, J. C. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Cuarta Edición. Colombia.
- Piza Rodríguez, J.R. (2012). Curso de derecho tributario procedimiento y régimen sancionatorio. Bogotá, D.C., Colombia: Editorial Universidad Externado de Colombia
- Protocolo De Kyoto De La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático. Promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contaminantes en el mundo.
- Vargas Palacios, L.N., Romero Vargas, P. y Morales Aguilar, O.D. (2018). Contribución de los impuestos verdes en la sostenibilidad ambiental en Colombia. Universidad Cooperativa De Colombia. Obtenido de: http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/4676/1/2018_contribucion_impuestos_verdes.pdf

ANEXOS

Anexo: A Guía de análisis normativo

FICHA DE ANÁLISIS NORMATIVO			
Título			
Objeto de la Norma			
Fecha de Promulgación		Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación			
Análisis del Contenido			
Análisis crítico			

Anexo: B

Guía de análisis de normatividad internacional

FICHA DE ANÁLISIS DE TRATADO INTERNACIONAL			
Título			
Objeto Tratado			
Fecha de Promulgación		Diario Oficial	
Artículos importantes para el desarrollo de la investigación			
Análisis del Contenido			
Opinión personal			

Anexo: C

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
ENTREVISTA ADMINISTRADA A PROFESIONALES EXPERTOS EN EL TEMA
CONCERNIENTE A LA IMPEMETACION DEL IMPUESTO DE LAS BOLSAS
PLASTICAS EN COLOMBIA.

Objeto: información utilizada únicamente como ayuda académica para la elaboración del proyecto de grado.

Entrevistado:

Entrevistador: Natalia Anselmi Garcés y Piedad Soraya Torres Ramírez.

Medio de registro de la información: Audio, Video.

1. ¿Conceptualice la aplicabilidad en el ordenamiento jurídico de los impuestos verdes en Colombia?
2. ¿Cuál es su opinión sobre la reforma tributaria del 2016 y sabe usted que trajo consigo sobre protección del medio ambiente?
3. ¿Cuál es la finalidad de implementar el impuesto a las bolsas plásticas en Colombia?
4. ¿Con la creación del impuesto a la bolsa plástica en Colombia se evidencia la disminución de su consumo', ¿si - no y por qué?
5. ¿Considera usted que es importante imprimir cultura de reciclaje y protección al medio ambiente mediante un impuesto? ¿si - no y por qué?
6. ¿Con la implementación del impuesto a la bolsa plástica se vislumbra beneficios para el quien recibe el impuesto, y no para el medio ambiente? ¿si - no y por qué? Argumente su respuesta.
7. ¿Enuncie una opinión sobre si sería viable en la actualidad, modificar el objeto y finalidad del impuesto verde a las bolsas plásticas en Colombia? Argumente su respuesta.

GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMACIÓN